



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprensa.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - Nº 594

Bogotá, D. C., martes, 8 de junio de 2021

EDICIÓN DE 21 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

INFORMES DE CONCILIACIÓN

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 36 DE 2019 SENADO, 459 DE 2020 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 001 DE 2019 SENADO

por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY No. 036 DE 2019 SENADO, 459 DE 2020 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY No. 001 DE 2019 SENADO. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA DEL ESTADO COLOMBIANO - PIM, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Honorable Senador
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente del Senado de la República
Honorable Representante
GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente de la Cámara de Representantes

Asunto: Informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 036 de 2019 Senado, 459 de 2020 Cámara. Acumulado con el proyecto de ley no. 001 de 2019 Senado. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA DEL ESTADO COLOMBIANO - PIM, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Respetados señores presidentes:

Atendiendo las designaciones efectuadas por las Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución Política y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, para continuar con su trámite correspondiente el texto conciliado del proyecto de ley de referencia.

Con el fin de cumplir la designación que nos hicieron, en reunión virtual sostenida por parte de los Congresistas conciliadores el día 8 de junio de 2021, se hizo estudio de los textos aprobados en la Plenaria del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, avanzado por los equipos de UTLs, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes:

1- El proyecto en su segundo debate en Senado sufrió cambios de estructura en su articulado, el cual fue modificado con el fin de darle orden al proyecto, responder a la estructura de la política migratoria y a los temas en este proyecto de ley tratados.

2- Posteriormente en la Cámara de Representantes, en su primer y segundo debate sumó proposiciones de varios congresistas, y además fue ajustado en algunos de sus artículos a fin de ir en concordancia con lo establecido en el Estatuto de protección para migrantes venezolanos.

Entre algunos de los ajustes a señalar están:

- Objeto, se incluye un párrafo de concertación de todas las etapas de la PIM con la totalidad de los actores de esta.

- Lineamientos (artº 3), En Cámara de Representantes se agregó el establecer medidas necesarias para prevenir toda forma de racismo, xenofobia y discriminación, así como la adopción de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la población.

- En Principios (artº 4º), En Cámara de Representantes se agregó la salvedad que la condición de no reconocimiento de refugio no implica que el postulante no pueda solicitar permiso de permanencia.

Así mismo se agregó el enfoque diferencial, se acoge por los conciliadores considerando que, de acuerdo con el enfoque general de Derechos Humanos, la Ley como la Política Migratoria colombiana atenderá de acuerdo con las disposiciones aprobadas como a las competencias constitucionales y legales de las autoridades migratorias, a todo migrante sin discriminación por el hecho de ser humano, aplicando medidas complementarias en el caso de que se requiera atención especial. Esto reconociendo que una de las poblaciones más vulnerables en el marco de las migraciones internacionales es precisamente la mujer migrante, para lo cual ésta misma ley dedica disposiciones especiales para la lucha contra la trata de personas, flagelo que afecta mayoritariamente a las mujeres.

- En Cámara de Representantes, en los **insumos de la política pública** se incluyeron los **Informes del Ministerio de Ciencia y Tecnología** con relación a los becarios de los programas de formación de alto nivel (artº 6º literal i). Y los **informes del Departamento Nacional de Planeación** a respecto de la migración (literal n)

- Se realizó en Cámara de Representantes la inclusión de la **definición de Refugiado** por las razones que algunos organismos internacionales han catalogado para esta expresión: temores fundados causados por persecución, amenaza, violencia o conflicto, y por razones fundadas de exposición o riesgo de peligro (artº 7. numeral 20).

En este artículo igualmente, se corrige en forma la ubicación de un párrafo en el numeral 26, que se traslada al final del artículo 7º como corresponde a párrafo 2º.

Igualmente se añadió en Cámara de Representantes el concepto de **colombianos en el Exterior**, que es uno de los conceptos tratados en buena parte del articulado propuesto.

- En el numeral 22 (art 7°), se modificó en la Plenaria de Cámara de Representantes la redacción del término "Salvoconducto" por proposición en plenaria de la Cámara de Representantes. Se consideró adecuada por el ponente y por los conciliadores en el entendido que la autoridad migratoria establecerá la reglamentación en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales para cada uno de los trámites migratorios, sobre los principios previstos en el marco internacional de DDHH y sobre los de la presente ley.

- Igualmente, en las definiciones se **incluyó la de asilado** de acuerdo con a quien se le otorgue conforme a la ley (numeral 3). Así mismo se añade una nueva definición de **diplomacia científica** conectada al aprovechamiento del recurso humano (numeral 27).

- Con relación a la **definición de niños y niñas y adolescentes, se dejó exclusivamente como los no acompañados**, en lo que es importante señalar, que el ICBF había indicado para el primer debate, la importancia de establecer la definición de niñez y adolescencia (numeral 17).

- Respecto al **ejercicio del control Migratorio (Art° 12)**, en Cámara de Representantes se complementó la redacción del párrafo aprobado por el Senado, que establece que la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, disponga de un **grupo móvil de control migratorio** para realizar procedimientos de verificación y autorización del estatus migratorio de las poblaciones con mayor flujo migratorio, considerando que debido a determinadas coyunturas no es posible desarrollar las actividades de verificación y control migratorio por fuera de los puestos de control migratorio establecidos.

- En el **Artículo 25**, se aprueba en Plenaria de la Cámara de Representantes, la **inclusión de la Registraduría Nacional del Estado Civil** dentro del Sistema Nacional de Migraciones, comprendiendo la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, y las competencias que dicha entidad ha debido asumir en el marco del fenómeno migratorio.

- En lo que tiene que ver con el **retorno productivo**, se incluye el tema de la cofinanciación con recursos ligados al Plan de Desarrollo del Departamento y/o municipio. E igualmente se establece el **retorno de los Deportistas** con una ruta establecida por el Ministerio del Deporte. (art. 30). Y se incluye un párrafo sobre emprendimientos y fortalecimiento de proyectos productivos en marcha.

- En el art 32°, sobre **Convalidación de Títulos**, se acoge el texto de Cámara de Representantes compartiendo el espíritu de la nueva disposición, en que efectivamente el proceso de convalidación es dinámico y cambiante de acuerdo con la evolución del campo académico y los sistemas de equivalencias y contenidos reconocibles por los estados a nivel global; así como de las exigencias a nivel mundial de cada disciplina y campos de estudio emergentes. Así mismo, se acomoda a la necesidad del ejecutivo, cambiar el sistema de convalidación cada vez que lo requiera, comprendiendo los principios para facilitar el trámite y con el enfoque previsto sobre los convenios en materia de migración laboral y vinculación que tratan los Acuerdos internacionales suscritos por Colombia, como los principios acogidos por la presente ley. Se deja de igual manera

su facultad y deber en actualizar su reglamentación en el párrafo 3 del mismo artículo, como en virtud de lo dispuesto dentro del artículo que contiene la Vigencia.

- Se incluyeron también en Cámara de Representantes los temas de **promoción de proyectos productivos enfocados en población de colombianos retornados**, junto a la promoción de la Ley de Retorno, la Ley del Emprendimiento en el exterior, la Ley de Turismo (arts 36, 37, 38 y 51); de los cuales se ilustró en el debate de la Plenaria de la Cámara de Representantes, tendrá plena aplicación para víctimas en el exterior, motivo por el cual se dejó como constancia la proposición presentada por la Representante Irma Herrera del Partido MIRA.

- Sobre el **fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior**, en Cámara de Representantes se establece la ampliación, actualización de registros consulares que faciliten su caracterización, fortalecimiento, y que garantice un censo que permita apoyar y acompañar a las familias y niños, niñas y adolescentes (NNA) ante el impacto de la migración, especialmente cuando son NNA no acompañados. (art. 45). Igualmente, se establece el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar el acceso a la información sobre pasaportes y otros trámites consulares, incluyendo la acreditación virtual del permiso de salida del país que otorgan los padres a los menores de edad (art. 53). Por último, en ese sentido eleva el grupo de trabajo de Colombia nos Une a una Dirección, sin la creación de gastos adicionales.

- Respecto de la necesidad inminente de **fortalecer el servicio que presta Cancillería a través de Colombia Nos Une, a la población de colombianos en el exterior** y, vincular a esta población y hacerlos sujetos de políticas públicas de forma eficiente y buscando eliminar las trabas existentes para su buen funcionamiento, la Comisión Segunda y la Plenaria de la Cámara de Representantes añadieron un artículo nuevo sobre Colombia Nos Une que se ve establecido en el artículo 52 del texto final aprobado. Lo anterior, respetando la autonomía del Ejecutivo en torno al artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y en cumplimiento del numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política colombiana respecto a las funciones del Congreso sobre la posibilidad de determinar la estructura de la Administración Nacional a través de una Ley Ordinaria.

De igual manera, dicho artículo fue aprobado y contó con el concepto positivo de la Canciller de la República de Colombia, en oficio remitido a Función Pública (OFICIO-S-DM-21005960). Asimismo, el **Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública (Armando López Cortés)** señaló en oficio escrito el 31 de mayo del 2021 que el Proyecto de Ley en cuestión es de **autoría del Ejecutivo, en coautoría de algunos congresistas, por lo cual cumple con lo establecido en la normativa vigente**; también que "el artículo se limita a ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que adelante la reestructuración en los términos del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Bajo este supuesto puede afirmarse que el legislador no está invadiendo las funciones del Presidente de la República, pues el artículo propuesto, no es excluyente respecto de la función del Gobierno Nacional, pues lo que ordena precisamente es que se cree la Dirección en el Ministerio siempre que se cumplan los requisitos legales ya enunciados". Culmina el director diciendo que "Es claro entonces que el Congreso no vulnera ningún precepto constitucional (...)".

- También se fortalece los contenidos relacionados con el **reconocimiento de la apatridia** en el país (art. 65, 66 y 67).
- Finalmente, con aval del Ministerio del Interior y del ponente en la Cámara de Representantes, se aprueban distintas propuestas para fortalecer la gestión frente al delito de trata de personas, que se consignan en los artículos 75, 89 y 90.

Por lo cual, terminada esta revisión, los conciliadores designados hemos tomado la decisión de **acoger la totalidad del texto aprobado en la Cámara de Representantes, a excepción de los artículos: 1, 21, 22, 27 y 59**, que quedarán como fueron aprobados por la Plenaria del Senado como se muestra en la siguiente tabla de consideraciones, con la respectiva justificación:

TEXTO APROBADO EN CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO APROBADO EN SENADO	JUSTIFICACIÓN
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria – PIM, del Estado colombiano; en relación con los espacios de direccionamiento, coordinación institucional, fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y desarrollo normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de Colombia establece y, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, y demás normas vigentes en la materia.	Artículo 1°. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria – PIM, del Estado colombiano; en relación con los espacios de direccionamiento, coordinación institucional, fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y desarrollo normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de Colombia establece y, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, y demás normas vigentes en la materia.	Se acoge el texto aprobado en Senado , comprendiendo que la propuesta de participación ciudadana dentro de política integral migratoria que se agregó en la Cámara de Representantes, ya se contempla en los artículos 22 al 25 en que el Sistema Nacional de Migraciones se consolida como un órgano consultivo y de interlocución con el Gobierno Nacional para el diseño, seguimiento y evaluación de la Política Migratoria, en el cual se da amplia participación a la población migrante a través de la Mesa de Sociedad Civil, que a partir de ésta ley será reglamentado su funcionamiento. Así mismo, que no sería posible establecer procesos de concertación para cada temática que se trata en la presente ley, especialmente en materias de potestad exclusiva del ejecutivo. Adicionalmente, la PIM contiene elementos que son potestativos de las autoridades migratorias por norma constitucional en lo que no cabe ejercicio de concertación, poniendo en dificultades la aplicación de la política.
Artículo 21°. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional. Son	Artículo 21°. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional.	Se acoge el texto aprobado en Senado , toda vez que en Cámara de

órganos o instancias de coordinación interinstitucional, los siguientes, sin perjuicio de los que sean creados posteriormente: (...) H. Colombia Nos Une. Encargado de vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas, buscando establecer condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada, manteniendo sus vínculos con el país, y brindando acompañamiento ante su eventual retorno.	Son órganos o instancias de coordinación interinstitucional, los siguientes, sin perjuicio de los que sean creados posteriormente: A. La Comisión Nacional Intersectorial de Migración (de la que trata el Decreto 1239 de 2003 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Órgano interinstitucional para la coordinación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano. B. La Comisión Intersectorial para el Retorno (de la que trata el Decreto 1000 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia a cargo de coordinar las acciones orientadas a brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno. C. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado – CONARE (de la que trata el Decreto 2840 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Es la instancia que tiene a su cargo recibir, estudiar y efectuar una recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por los extranjeros, de conformidad a la normativa interna e internacional en materia de refugio. D. El Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior. Encargado de evaluar y recomendar al Ministro de Relaciones Exteriores, la asignación, cuantía y destino de las partidas que se deban otorgar para la protección de los derechos	Representantes se aprobó un párrafo adicional dando la potestad para la creación de una instancia única que se encargue de situaciones extraordinarias y además faculta para la expedición de actos administrativos con fuerza de Ley. Además se indica que Colombia nos Une hará parte de los órganos e instancias de coordinación interinstitucional. Se estima inconveniente en el análisis de los conciliadores, dado que no se indica el tipo de autoridad ni los alcances de sus decisiones administrativas que a futuro pueden causar distorsiones respecto de las funciones conferidas a las autoridades migratorias que precisamente se fortalecen en la presente Ley (Cancillería y Migración Colombia); igualmente, se considera innecesario toda vez que, así como hoy existe la Gerencia de Fronteras, el Presidente de la República puede en todo momento designar y crear instancias de coordinación para la gestión migratoria. Además Colombia Nos Une ya hace parte de las distintas instancias de coordinación interinstitucional y en el futuro puede ser agregado por la potestad conferida en el primer inciso que menciona el artículo aprobado en Senado.
Parágrafo. El Gobierno nacional, establecerá una instancia única, para la articulación y gobernanza de la atención e integración de flujos migratorios excepcionales a Colombia, cuando las circunstancias extraordinarias de un país lo ameriten, la cual tendrá la función de asesorar al Gobierno en el establecimiento de lineamientos para coordinar la oferta de atención e integración de la población migrante en los niveles internacional, nacional y territorial y las demás funciones que se le asignen mediante acto administrativo.		

<p>fundamentales de los colombianos en el exterior y la atención de los casos que por su naturaleza ameriten la asistencia del Estado. E. El Comité Evaluador de Casos - Fondo Especial Para Las Migraciones (del que trata el Decreto 4976 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). A cargo de evaluar y decidir sobre las solicitudes que serán atendidas con los recursos del Fondo Especial para las Migraciones. F. La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes (de la que trata el Decreto 1692 de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Mecanismo técnico y operativo para la coordinación y orientación de las acciones que se adopten contra el tráfico de migrantes. G. El Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Personas (del que trata la Ley 985 de 2005 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia de coordinación interinstitucional de las acciones que desarrolle el Estado colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas.</p>	<p>Artículo 22°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así: "Artículo 1. CREACIÓN. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, SNM, como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, ejecución,</p>	<p>Se acoge el texto aprobado en Senado, en el entendido que se considera esencial que las Comisiones Segundas de Senado y Cámara formen parte activa de este mecanismo interinstitucional, ya que no solo la formulación de esta Ley migratoria, sino del seguimiento a la política migratoria, ha nacido y se ha desarrollado desde este espacio democrático de representatividad nacional. Por ello se</p>	<p>acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria - PIM con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante. Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación y ejecución de la Política Migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a entidades del orden nacional y territorial, organizaciones, expertos, científicos y/o ciudadanía en general, que considere necesarios para la realización de sesiones formales de trabajo del Sistema Nacional de Migraciones".</p>	<p>seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria - PIM con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante. Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación y ejecución de la Política Migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a entidades del orden nacional y territorial, organizaciones, expertos y/o ciudadanía en general, que considere necesarios para la realización de sesiones formales de trabajo del Sistema Nacional de Migraciones. <u>Las Comisiones Segundas del Congreso de la República podrán solicitar la realización de estas sesiones, cuando lo considere pertinente.</u></p>	<p>estima conveniente dejar habilitada la posibilidad que en cualquier momento las Comisiones Segundas puedan convocar y acompañar las sesiones del Sistema Nacional de Migraciones como las Mesas de Trabajo que tratan los artículos 22, 24 y 25, para facilitar la interlocución con el Estado y el fortalecimiento de la agenda migratoria.</p>
<p>Artículo 27°. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país se compone como mínimo de la asistencia psicológica y asesoria</p>	<p>Artículo 27°. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país se hará en coordinación con el</p>	<p>Se acoge el texto aprobado en Senado, considerando que si bien la proposición presentada en la Cámara concibe un buen espíritu de definir mínimos del tipo de atención que trata, puede limitar la acción que ya viene desempeñando y promoviendo el ICBF y la Cancillería para el acompañamiento de NNA, por lo cual se estima conveniente la redacción aprobada en Senado, que fue una propuesta del ICBF y que le permitirá actuar de forma integral para el acompañamiento de NNA.</p>	<p>Artículo 27°. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país se hará en coordinación con el</p>	<p>Artículo 27°. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país se hará en coordinación con el</p>	<p>Se acoge el texto aprobado en Senado, considerando que si bien la proposición presentada en la Cámara concibe un buen espíritu de definir mínimos del tipo de atención que trata, puede limitar la acción que ya viene desempeñando y promoviendo el ICBF y la Cancillería para el acompañamiento de NNA, por lo cual se estima conveniente la redacción aprobada en Senado, que fue una propuesta del ICBF y que le permitirá actuar de forma integral para el acompañamiento de NNA.</p>
<p>jurídica, se hará en coordinación con el grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus veces al interior del ICBF Artículo 59°. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en el territorio nacional bajo el principio de la discrecionalidad y soberanía del Estado, la cual acredita que el portador extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un plazo de permanencia y actividad determinados. (...) Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio de las medidas legales o reglamentarias transitorias establecidas en la materia, la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en Colombia se demostrará con la titularidad de una visa de Residente Permanente vigente tanto en calidad de titular principal como en calidad de beneficiario.</p>	<p>grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus veces al interior del ICBF Artículo 52°. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en el territorio nacional bajo el principio de la discrecionalidad y soberanía del Estado, la cual acredita que el portador extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un plazo de permanencia y actividad determinados. (...) Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio de las medidas legales o reglamentarias transitorias establecidas en la materia, la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en Colombia se constituye habiendo sido titular por tres (3) años continuos e ininterrumpidos de la visa que acredite tanto su regularidad migratoria en el país como su intención o ánimo de permanecer en el territorio nacional.</p>	<p>Respecto del artículo 59 del texto final aprobado en Cámara, que ajusta su parágrafo 1 del contenido de VISA. Se acoge el texto aprobado en Senado, correspondiente al artículo 52 del texto final, a fin de mantener el espíritu de la regularidad que se busca con la política, sin imponer mayores cargas a los migrantes que han alcanzado el tiempo demostrado de permanencia en el país con la intención de residencia. En el entendido que el único requisito para el Visado es la demostración de domicilio por 3 años ininterrumpidos, sin otro requisito adicional.</p>	<p>TEXTO CONCILIADO DEL Proyecto de Ley No. 036 de 2019 Senado, 459 de 2020 Cámara. Acumulado con el proyecto de ley No. 001 de 2019 Senado. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA DEL ESTADO COLOMBIANO - PIM, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".</p>		
<p>En consecuencia, los suscritos conciliadores solicitamos a las plenarios del Congreso de la República aprobar el texto conciliado del Informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 036 de 2019 Senado, 459 de 2020 Cámara. Acumulado con el proyecto de ley no. 001 de 2019 Senado. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA DEL ESTADO COLOMBIANO - PIM, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", como se incluye en este documento.</p>			<p>EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: CAPÍTULO I Objeto, lineamientos, definiciones y principios de la Política Integral Migratoria - PIM</p>		
<p>Cordialmente los conciliadores, EMMA CLAUDIA CASTELLANOS Senadora de la República JUAN DAVID VELEZ Representante a la Cámara</p>			<p>Artículo 1°. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria - PIM, del Estado colombiano; en relación con los espacios de direccionamiento, coordinación institucional, fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y desarrollo normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de Colombia establece y, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, y demás normas vigentes en la materia. Artículo 2°. Objetivos de La Política Integral Migratoria. En la formulación, implementación, ejecución y evaluación de la PIM se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: <ol style="list-style-type: none">1. Propender por una migración segura, ordenada y regular.2. Promover la integración socioeconómica, cultural, el desarrollo sostenible, la prosperidad, así como la integración científica, tecnológica y de innovación, a través de los aportes de los migrantes.3. Articular la PIM con la agenda de las entidades del orden nacional, departamental y municipal.4. Fortalecer y generar alianzas nacionales e internacionales a nivel bilateral, regional y subregional para la gestión migratoria y la gobernanza de las migraciones.5. Fortalecer los sistemas de información para la identificación, caracterización, localización, y flujo de datos que se requieran para dar soporte a la PIM.6. Generar la caracterización de la población en el exterior, de los migrantes y de los retornados, con fines científicos y tecnológicos, permitiendo reconocer las necesidades de esta población y sus intereses de retorno.7. Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta de servicios del Estado para colombianos en el exterior y retornados.8. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la PIM.</p>		
<p>ANA FLORES AGUDELO Senadora de la República ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO Representante a la Cámara</p>					

<p>9. Desarrollar estrategias para la protección de los derechos humanos de los migrantes.</p> <p>10. Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.</p> <p>11. Promover la migración regular a instancias del Ministerio de Relaciones.</p> <p>Parágrafo. Además de otros objetivos, los que por necesidad defina el Gobierno Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.</p> <p>Artículo 3°. Lineamientos de la Política Integral Migratoria. Para el cumplimiento de sus objetivos, la PIM contará con los siguientes lineamientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propender por una migración segura, ordenada y regular en condiciones dignas, que permitan que los migrantes refugiados y retornados gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos por la Constitución, y por los instrumentos internacionales ratificados y vigentes para Colombia. 2. Considerar prioritaria la asistencia, vinculación en la construcción y participación de políticas públicas y acompañamiento a los migrantes colombianos que se encuentran en el exterior y retornados. 3. La migración es una realidad pluridimensional con efectos positivos de impulso y desarrollo tanto para las sociedades de origen como para las de destino, reafirmando el rechazo a tratamientos utilitaristas de las personas migrantes y rechazo a cualquier forma de explotación. 4. Adoptar las medidas necesarias para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas migrantes como el racismo, la xenofobia, la intolerancia, entre otras. 5. Guardar la coherencia respecto de la respuesta a las dinámicas internacionales en materia de migración, buscando que el tratamiento de los nacionales en el exterior sea el mismo que se ofrece a los extranjeros en Colombia. 6. Velar por la unidad familiar, siempre que esta no amenace o vulnere los derechos fundamentales de terceros, ni ponga en riesgo la seguridad nacional. Especialmente considerando el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el respeto a sus derechos y su protección integral. La reglamentación de esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este derecho. 7. El suministro de información oportuna e íntegra deberá acompañar todo lo relacionado con los procesos migratorios. 8. La Cooperación Internacional hará parte del diálogo y la acción conjunta para propender por una migración segura, ordenada y regular. 9. Se reconoce el hecho migratorio como realidad pluridimensional y multicausal en el marco del cual se ha propiciado la conformación de una diáspora de colombianos alrededor del mundo. 10. Adopción de medidas que reduzcan la condición de vulnerabilidad de la población migrante. <p>Parágrafo. Además de otros lineamientos que por necesidad defina el Gobierno Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.</p>	<p>Artículo 4°. Principios. Son principios de la Política Integral Migratoria – PIM del Estado colombiano en concordancia con la Constitución, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soberanía. Es la prerrogativa del Estado para autorizar la admisión, el ingreso, el tránsito, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional y decidir sobre su naturalización. 2. Participación. Es el ejercicio de los derechos establecidos en la normatividad colombiana a los connacionales en el exterior, respetando la legislación del Estado receptor, así como el ejercicio por parte de los extranjeros en Colombia de los derechos que les reconoce la legislación nacional. 3. Facilitación. El Estado colombiano impulsará la implementación de procedimientos que fomenten la integración y permitan un adecuado control migratorio de manera segura, ordenada y regular. 4. Reconocimiento. Para el desarrollo de la PIM el Estado colombiano reconoce los lazos históricos y sociales en las fronteras con sus países vecinos, incluidos los grupos étnicos presentes a ambos lados de las zonas limítrofes y su movilidad transfronteriza. 5. Reciprocidad. El Estado colombiano aplicará el principio de reciprocidad en el trato con otros Estados. 6. Igualdad. El Estado colombiano reconoce la igualdad de derechos de los migrantes, el migrante es sujeto de derechos y obligaciones. 7. Integración. El Estado colombiano promueve la integración del migrante y su familia, a la sociedad y la cultura, tanto para los colombianos en el exterior, como para los migrantes en Colombia. 8. Integralidad. El Estado colombiano impulsa el tratamiento integral de la realidad migratoria pluridimensional, así como una respuesta intersectorial y multidimensional. 9. Interés superior de niñas, niños y adolescentes. En todos los procesos y procedimientos vinculados a la presente Ley, se tomarán en cuenta las normas previstas en la normativa en la materia, particularmente el interés superior de niñas, niños y adolescentes y el respeto a sus derechos, y su protección integral. 10. Libre Movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a entrar y salir de él, y a regresar a su país, con las limitaciones que establezca la ley. 11. No Devolución. No se devolverá a persona alguna al país, sea o no de origen, en el cual su vida, libertad e integridad esté en riesgo por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o cuando existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia en la materia. Aquellos solicitantes de la condición de refugiados que no hubieran obtenido el estatuto de tal, podrá solicitar un permiso de permanencia en el país, de conformidad a la legislación existente en Colombia. 12. Proporcionalidad. Las autoridades en materia migratoria aplicarán el principio de proporcionalidad en el ejercicio de su función y medidas sancionatorias.
<ol style="list-style-type: none"> 13. Concordancia. Todo proceso de negociación de tratados, convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales que asuma Colombia en materia migratoria o consular o relacionados a estos temas, será en armonía y concordancia con la PIM. 14. Coordinación, articulación y subsidiariedad. Las autoridades administrativas de todo orden y nivel coordinarán sus actuaciones e intervendrán en el diseño y desarrollo de programas, proyectos y acciones que permitan incluir a la población migrante. 15. Transversalidad. Las acciones, programas y proyectos que desarrolle el Estado colombiano a favor de los migrantes, serán aplicables en todos sus niveles territoriales, oficinas consulares y en las políticas públicas que se desarrollen en los diferentes sectores administrativos. 16. Debido proceso. En las actuaciones administrativas relativas a los asuntos migratorios, su aplicación se hará con arreglo a la norma vigente. 17. Dignidad humana. La presente ley se regirá por el principio de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 18. Principio de Eficacia: Las autoridades sujetas a las disposiciones del presente proyecto de ley, deberán propender por el cumplimiento de los objetivos de la Política Integral Migratoria a través de su reglamentación interna, evitando la creación de obstáculos formales que pudieran retrasar o impedir su materialización. 19. No discriminación: Las disposiciones de esta Ley, se aplicarán sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencia, nacionalidad o ascendencia nacional, idioma, origen social o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o por cualquier otra situación. 20. Enfoque Diferencial: El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, todos los procesos y procedimientos vinculados a la presente Ley estarán orientados por el principio de enfoque diferencial, con el propósito de alcanzar la igualdad. <p>Artículo 5°. Ejes de la política. En la formulación, implementación y ejecución de la Política Integral Migratoria - PIM se definirán acciones diferenciales y protocolos específicos para la gestión de fronteras y las crisis humanitarias, teniendo en cuenta los siguientes ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soberanía y seguridad nacional. 2. Derechos humanos. 3. Cooperación Internacional. 4. Gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacional y territorial. 5. Participación Ciudadana. 6. Integración social, económica y cultural. <p>Parágrafo. Además de los ejes de política, que por necesidad defina el Gobierno Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.</p>	<p>Artículo 6°. Insumos para la Planeación de la Política. La planeación de la Política Integral Migratoria - PIM, tendrá en cuenta los siguientes insumos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los instrumentos internacionales en materia migratoria ratificados por el Estado colombiano. 2. Los planes de desarrollo nacional, y territorial. 3. Los programas anuales operativos en relación con los recursos humanos calificados disponibles y los necesarios para su cumplimiento. 4. Los informes del Ministerio de Trabajo, sobre la situación laboral del país. 5. Los informes del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros - SIRE sobre la demanda de servicios, el cumplimiento del aporte patronal - en el caso de contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras - y del aseguramiento voluntario de los trabajadores extranjeros independientes. 6. Los informes de los Ministerios de Agricultura; Industria, Comercio y Turismo; y de Relaciones Exteriores, y los del Departamento Nacional de Planeación, en relación con las necesidades de los sectores productivos nacionales y de inversión extranjera sobre recurso humano inexistente o insuficiente en el país. 7. El plan sectorial del turismo elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en función de las necesidades y prioridades del turismo en el país. 8. Los informes del Ministerio de Educación Nacional, sobre el estado de la situación de la oferta y la demanda educativa en el país y la incidencia de la migración en ella. 9. Los informes del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación respecto a becarios de los programas de formación de alto nivel fuera del país. 10. Los informes técnicos y académicos sobre la migración y el desarrollo. 11. Los informes socioeconómicos emitidos por parte del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. 12. Los aportes de las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales que presten servicios de atención a migrantes. 13. Los procesos de caracterización y registro consular que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consulados y en compañía de otras entidades. 14. Los informes técnicos sobre migración emitidos por el Departamento Nacional de Planeación. <p>Además de los insumos anteriores, las autoridades a cargo de la formulación de la Política Pública podrán usar otros que consideren pertinentes.</p> <p>Artículo 7°. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se consideran dentro de la Política Integral Migratoria - PIM, las siguientes definiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Política Integral Migratoria - PIM: Es aquella que integra los objetivos, definiciones, lineamientos, estrategias y acciones, para la atención, orientación, integración, desarrollo, participación, organización y disposiciones concernientes a la migración desde y hacia Colombia.

<p>2- Apátrida: De conformidad con el numeral 1 del Artículo 1 del Estatuto de los Apátridas de 1954, el término "apátrida" designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.</p> <p>3- Asilado en Colombia: Extranjero a quien el Estado colombiano le ha reconocido tal condición, de conformidad con los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es Parte y, con la normatividad interna en la materia.</p> <p>4- Autoridades de pasaportes: Oficinas autorizadas para la expedición de pasaportes y/o documentos de viaje. En el territorio colombiano corresponderá a las oficinas de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá o las Gobernaciones autorizadas para ello; en el exterior: los Consulados de Colombia o secciones consulares de las Embajadas de Colombia.</p> <p>5- Autoridades de visas: Oficinas autorizadas para la recepción de una solicitud de visa y la encargada de su estudio y decisión de acuerdo con la normatividad vigente. Serán autoridades de visa en el exterior, los Consulados de Colombia o secciones consulares de las Embajadas de Colombia, y en Bogotá, el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la oficina que haga sus veces dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior, sin perjuicio de las demás funciones asignadas a estas dependencias por la normatividad vigente.</p> <p>6- Colombianos en el exterior: Connacional residente en el exterior que mantiene su vínculo de sangre con el Estado colombiano, así como sus derechos y deberes con el mismo.</p> <p>7- Control Migratorio: Procedimiento realizado por funcionarios de la autoridad competente, el cual se revisa y analiza el cumplimiento de los requisitos establecidos durante la autorización o negación que una persona pueda ingresar, permanecer o salir del territorio nacional.</p> <p>8- Convalidación Proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional efectúa sobre un título de educación superior, otorgado por una Institución legalmente autorizada por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior; de tal forma que con dicho proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las instituciones de Educación Superior Colombianas.</p> <p>9- Deportación: Aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad migratoria impone como sanción administrativa a un extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en situación de permanencia irregular migratoria en los términos previstos en la Ley.</p> <p>10- Expulsión: aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad migratoria impone como sanción administrativa a un extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en una o varias de las faltas contenidas en la Ley.</p> <p>11- Inadmisión: Decisión administrativa por la cual la autoridad de control, verificación migratoria y extranjería al efectuar el control de inmigración o de personas en tránsito, le niega el ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales que determinen las normas vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos.</p> <p>12- Instrumento de Movilidad Fronteriza: Aquel que facilite la movilidad y el control transfronterizo.</p> <p>13- Migración Laboral: De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de su Familia, un trabajador</p>	<p>migrante es una persona que se dedicará, se dedica o se ha dedicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional. Un trabajador migrante se define en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo como una persona que migra de un país a otro (o que ha migrado de un país a otro) con la idea de ser empleado, de otra manera que no sea por su cuenta, e incluye a cualquier persona regularmente admitida como un migrante.</p> <p>14- Tipos de migración: Serán los siguientes, y los que además y en adelante las autoridades en materia migratoria definan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migración Regular: Es el proceso de ingreso y salida del territorio nacional de ciudadanos nacionales y extranjeros debidamente registrados por los puestos de control migratorio habilitados por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el uso del pasaporte, visa, documento de viaje, u otros documentos debidamente establecidos por la normatividad vigente o los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano • Migración Irregular: Ingreso o permanencia en el territorio nacional de ciudadanos extranjeros no autorizados para ingresar o permanecer en el territorio. • Migración pendular: Son los migrantes que residen en zonas de frontera y se movilizan habitualmente entre los dos Estados, con la posibilidad de realizar múltiples ingresos y salidas al día, con el debido registro, por un mismo Puesto de Control Migratorio. • Migración de tránsito: Migrante que ingresa al territorio nacional sin vocación de permanencia con el propósito de dirigirse hacia un tercer país. • Migración con vocación de permanencia: Migrantes con el interés de permanecer en el país de manera regular para ejercer cualquier actividad lícita de conformidad a la legislación vigente. <p>15- Nacionalidad: Vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y un Estado. La regulación de la nacionalidad compete a la legislación interna de cada Estado.</p> <p>16- Niños, Niñas y Adolescentes - NNA: Para efectos de esta Ley, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 17 años, 11 meses y 29 días de edad.</p> <p>17- Niños, Niñas y Adolescentes - NNA no acompañados: Niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad.</p> <p>18- Permanencia: Es el tiempo durante el cual el extranjero podrá permanecer en el territorio nacional de acuerdo con la legislación vigente.</p> <p>19- Puestos de Control Migratorio: Se entenderán por puestos de control migratorio, aquellos lugares habilitados para el ingreso y egreso al territorio nacional (aéreos internacionales, marítimos, terrestres y fluviales) ya sean permanentes o temporales.</p> <p>20- Refugiado en Colombia: Persona que:</p> <p>a) Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;</p>
<p>b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público;</p> <p>c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.</p> <p>21- Retornado: Ciudadano colombiano residente en el exterior que previo al cumplimiento de requisitos se acoge a la ruta de atención diseñada por el Estado colombiano para acompañar y otorgar condiciones favorables para su regreso al país. Incluidos los hijos de connacionales nacidos en el exterior considerados retornados de segunda y tercera generación, o el colombiano que luego de haber residido en el exterior regresa, y previa petición y cumplimiento de requisitos es registrado en el Registro Único de Retornados.</p> <p>22- Salvoconducto. El Salvoconducto es el documento de carácter temporal, que expide la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al extranjero que así lo requiera para regularizar su permanencia o salida del país, y definir así su estatus migratorio bajo las circunstancias que establezca la autoridad de control, verificación migratoria y extranjería. En ningún caso reemplazará el pasaporte ni la visa o se considerará extensión o prórroga de esta.</p> <p>23- Tráfico de Migrantes: Promover, inducir, facilitar, generar, financiar, colaborar o participar de cualquier forma de entrada o salida irregular de personas con el ánimo de obtener algún lucro o provecho.</p> <p>24- Tránsito fronterizo: Es el paso circunstancial de personas residentes en las localidades fronterizas a Colombia, para movilizarse dentro de la zona de frontera colombiana y por los sitios determinados por el Gobierno Nacional.</p> <p>25- Trata de Personas: De conformidad con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata de personas se define como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el fraude, el engaño, el rapto, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.</p> <p>26- Vulnerabilidad: Es la inseguridad, riesgo e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social.</p> <p>27- Diplomacia Científica: La diplomacia científica es el uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y construir alianzas internacionales constructivas. Asimismo, corresponde al esfuerzo por</p>	<p>aprovechar la participación y el intercambio científico en apoyo de objetivos más amplios, más allá del descubrimiento científico.</p> <p>Parágrafo 1o. Además de otras definiciones que por necesidad establezca el Gobierno Nacional, o que desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.</p> <p>Parágrafo 2o. En todo caso, las medidas de deportación o expulsión vigentes no deben socavar el principio de no devolución.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO II De la Política Integral Migratoria y las autoridades en materia migratoria</p> <p>Artículo 8º. De la Política Integral Migratoria – PIM. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria, formular, orientar, ejecutar y evaluar la PIM del Estado colombiano, definir los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, las condiciones y requisitos para el otorgamiento de visas, determinar aquellas nacionalidades exentas de visa y las condiciones para la aplicación de esta medida, aplicar el régimen legal de nacionalidad, en lo pertinente.</p> <p>La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará conforme a sus funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería en el territorio colombiano, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores dada su naturaleza de entidad adscrita.</p> <p>Los órganos o instancias de coordinación interinstitucional del nivel nacional y territorial, así como el Sistema Nacional de Migraciones – SNM, acompañarán al Gobierno Nacional en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos, estrategias y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con la población migrante.</p> <p>Artículo 9º. Autoridades en materia migratoria. Se establecen como autoridades en materia migratoria a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- El Ministerio de Relaciones Exteriores quien, a través de su Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o quien haga sus veces, actuará como ente a cargo de la formulación y ejecución de la PIM en general. 2- La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como organismo civil de seguridad a cargo de las funciones de control migratorio, extranjería y verificación migratoria del Estado colombiano, será la autoridad ejecutora de la PIM en los asuntos de su competencia, con jurisdicción en todo el territorio nacional. <p>Artículo 10º. De los trámites y servicios. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrán discrecionalmente crear, implementar, o suprimir trámites y servicios que se requieran, para el desarrollo de sus funciones misionales.</p>

<p>Los requisitos, procedimientos y costos de los trámites y servicios prestados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, serán definidos mediante acto administrativo, sin perjuicio de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en aplicación del principio de reciprocidad.</p> <p>Artículo 11°. Autoridad de Control, Verificación Migratoria y Extranjería. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con la política migratoria, el ejercicio de control migratorio, verificación migratoria y extranjería en el territorio, a través de procesos que permitan verificar y analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para el ingreso, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros y de nacionales en aquellas situaciones que les sean aplicables.</p> <p>La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad a lo señalado por la presente Ley.</p> <p>Parágrafo 1°. En ejercicio del principio de soberanía la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, implementará y desarrollará los procedimientos adecuados para la efectiva recolección de información biográfica, demográfica y biométrica, que permita una adecuada identificación de los viajeros y migrantes.</p> <p>Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia efectuará el control migratorio de pasajeros y tripulantes de medios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y fluvial internacional en los puestos de control migratorio, en los puertos, aeropuertos o terminales portuarios.</p> <p>Artículo 12°. Ejercicio de Control Migratorio. En ejercicio del control migratorio y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales vigentes, corresponde a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia adelantar las investigaciones o estudios que considere necesarias, de oficio o a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el ingreso al país y salida de los extranjeros de este país, así como con las visas que ellos portan, su ocupación, profesión, oficio o actividad que adelantan en el territorio nacional, autenticidad de documentos, y verificación de parentesco.</p> <p>El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrá autorizar de manera temporal a la Fuerza Pública, previa celebración de los convenios a que hubiere lugar, y en coordinación con las autoridades competentes la función de control migratorio, únicamente en aquellos lugares en los cuales la Entidad no cuenta con Direcciones Regionales.</p> <p>Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, dispondrá de un grupo móvil de control migratorio en convenio o en conjunto con la fuerza pública, con el objeto de realizar los procedimientos de verificación y autorización de estatus migratorio en las poblaciones con mayores índices de flujo migratorio en el territorio nacional.</p>	<p>Artículo 13°. Regulación Migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad rectora en materia migratoria y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, coordinarán de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la normativa nacional, el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la función migratoria.</p> <p>Artículo 14°. Regularización de extranjeros. El Estado colombiano establecerá los lineamientos y políticas de fomento de la migración segura, ordenada y regular para mitigar los efectos negativos de la inmigración irregular, que incluya un sistema de alertas tempranas.</p> <p>Cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el ámbito de sus competencias adoptarán los criterios necesarios para definir mecanismos temporales o especiales de flexibilización migratoria y, emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Artículo 15°. Extranjería. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de extranjería, es la encargada de expedir los documentos de identificación de extranjeros admitidos con una visa por un término mayor a tres (3) meses, para lo cual implementará los sistemas de gestión y operación que sean necesarios, a cuyos lineamientos deberán ajustarse y colaborar armónicamente las demás entidades del país.</p> <p>Artículo 16°. Verificación Migratoria. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como organismo civil de seguridad, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional y su potestad sancionatoria, ejercerá sus funciones de vigilancia y control migratorio a todas las personas naturales (nacionales o extranjeras) o jurídicas con vínculo con extranjeros en el territorio nacional, conforme a la Constitución, la Ley y el Reglamento.</p> <p>Para el cumplimiento de su objetivo, Migración Colombia ejercerá como órgano de policía judicial permanente por intermedio de sus dependencias especializadas para la investigación penal de delitos asociados a las dinámicas migratorias.</p> <p>Artículo 17°. Inadmisión o rechazo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional, conforme a la Constitución y la Ley, y en ejercicio de sus competencias podrá negar el ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales que determinen las normas vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos.</p> <p>Artículo 18°. Gestión Migratoria. El Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de colaboración armónica y de acuerdo con normativa vigente, fortalecerá su gestión migratoria a través de los instrumentos jurídicos que dispone y desarrollará su potestad sancionatoria en materia migratoria a</p>
<p>través de los procedimientos administrativos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, respecto de la inadmisión, deportación o expulsión, cancelación de la visa y permisos; sanciones y los procedimientos migratorios requeridos a los extranjeros en Colombia.</p> <p>Artículo 19°. De la ejecución de la medida migratoria. La autoridad de control, verificación migratoria y extranjería podrá dejar al extranjero sujeto de las medidas de inadmisión, deportación o expulsión, establecidas en la normatividad vigente, a disposición de las autoridades del país de su nacionalidad de origen, del último país donde hizo su ingreso a Colombia o de un tercero que lo acoja o requiera.</p> <p>Se entenderá que el extranjero ha cumplido la sanción de deportación y/o expulsión, cuando se ha verificado conforme al debido proceso que ha permanecido fuera del territorio nacional durante el término estipulado en la resolución que así lo determinó.</p> <p>Artículo 20°. Coordinación Interinstitucional. En virtud de los principios de colaboración y articulación, las entidades públicas vinculadas a la ejecución de la Política Integral Migratoria dispondrán de la asesoría técnica requerida de manera y coordinada. Además, deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de estas políticas.</p> <p>Artículo 21°. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional. Son órganos o instancias de coordinación interinstitucional, los siguientes, sin perjuicio de los que sean creados posteriormente:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Comisión Nacional Intersectorial de Migración (de la que trata el Decreto 1239 de 2003 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Órgano interinstitucional para la coordinación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano. La Comisión Intersectorial para el Retorno (de la que trata el Decreto 1000 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia a cargo de coordinar las acciones orientadas a brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado – CONARE (de la que trata el Decreto 2840 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Es la instancia que tiene a su cargo recibir, estudiar y efectuar una recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por los extranjeros, de conformidad a la normativa interna e internacional en materia de refugio. El Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior. Encargado de evaluar y recomendar al Ministro de Relaciones Exteriores, la asignación, cuantía y destino de las partidas que se deban otorgar para la protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y la atención de los casos que por su naturaleza ameriten la asistencia del Estado. El Comité Evaluador de Casos - Fondo Especial Para Las Migraciones (del que trata el Decreto 4976 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). A cargo de 	<p>evaluar y decidir sobre las solicitudes que serán atendidas con los recursos del Fondo Especial para las Migraciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes (de la que trata el Decreto 1692 de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Mecanismo técnico y operativo para la coordinación y orientación de las acciones que se adopten contra el tráfico de migrantes. El Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Personas (del que trata la Ley 985 de 2005 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia de coordinación interinstitucional de las acciones que desarrolle el Estado colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III Sistema Nacional De Migraciones</p> <p>Artículo 22°. Modifíquese el artículo 1o de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><i>"Artículo 1°. CREACIÓN. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, SNM, como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria - PIM con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante.</i></p> <p><i>Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación y ejecución de la Política Migratoria.</i></p> <p><i>El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a entidades del orden nacional y territorial, organizaciones, expertos y/o ciudadanía en general, que considere necesarios para la realización de sesiones formales de trabajo del Sistema Nacional de Migraciones. Las Comisiones Segundas del Congreso de la República podrán solicitar la realización de estas sesiones, cuando lo considere pertinente."</i></p> <p>Artículo 23°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><i>"Artículo 2°. El Sistema Nacional de Migraciones, SNM, tendrá como objetivo principal acompañar de manera consultiva al Gobierno Nacional, en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con los colombianos retornados, colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia en el desarrollo de la Política Integral Migratoria - PIM."</i></p> <p>Artículo 24°. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 1465 de 2011:</p>

<p><i>*Artículo 4º A. El Sistema Nacional de Migraciones tendrá las siguientes funciones complementarias a las disposiciones de la presente ley:</i></p> <p>5. Efectuar sugerencias al Gobierno Nacional sobre temas migratorios.</p> <p>6. Elaborar recomendaciones sobre la Política Integral Migratoria, en sus fases de formulación, ejecución y evaluación.</p> <p>7. Formular propuestas para el desarrollo de la Política Integral Migratoria.</p> <p>8. Hacer seguimiento a las propuestas presentadas al alto gobierno sobre Política Integral Migratoria -PIM.</p> <p>Parágrafo 1º. El ejercicio de participación ciudadana se orientará de acuerdo con las leyes 1757 de 2015 y 1755 de 2015, y la normativa que se agregue o desarrolle en la materia.</p> <p>Parágrafo 2º. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará un informe anual a las Comisiones Segundas del Congreso de la República sobre la gestión realizada desde el Sistema Nacional de Migraciones, el cual deberá contar con amplia difusión hacia la población migrante. Este informe podrá ser presentado en sesiones formales, sesiones formales conjuntas o audiencias públicas*.</p> <p>Artículo 25º. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><i>*ARTÍCULO 5º. CONFORMACIÓN. El Sistema Nacional de Migraciones estará integrado por:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado. 2. El Director de Migración Colombia o su delegado. 3. El Representante a la Cámara que ostente la curul por la circunscripción especial para los colombianos en el Exterior. 4. El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Dirección de Movilidad Laboral. 5. La Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones. 6. El Ministerio de Educación Nacional. 7. El Ministerio de Salud y Protección Social. 8. El Ministerio Público, con participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. 9. La Registraduría Nacional del Estado Civil. <p><i>La Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones actuará como eje central, de las entidades estatales y gubernamentales que no formen parte (pero cuyas funciones, objetivos o algún desarrollo misional tengan relación con los temas concernientes a la migración en Colombia).</i></p> <p>Parágrafo 1º. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones será un espacio de participación abierto, bajo la coordinación de Colombia Nos Une, al que se podrá inscribir cualquier</p>	<p>ciudadano colombiano residente en el exterior o en el territorio nacional en calidad de retornado o migrante regular en Colombia, interesado en el tema migratorio. La inscripción a esta mesa le permitirá obtener información actualizada relacionada con el desarrollo institucional de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano - PIM, y participar así mismo de las actividades para su discusión y desarrollo.</p> <p>Este mecanismo facilitará y promoverá la participación ciudadana en los temas que se discutan alrededor de la PIM desde el Sistema Nacional de Migraciones. De conformidad al Art. 1 de la presente ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá convocar a los miembros de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, para participar de manera presencial o virtual de lo dispuesto en el art. 4A de la presente ley.</p> <p>Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces, cuando las condiciones geográficas lo permitan, deberán convocar a la ciudadanía que hace parte de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, para participar en la formulación y consolidación de las sugerencias, recomendaciones y propuestas dirigidas al Sistema Nacional de Migraciones. Las convocatorias para la participación ciudadana a las que se refiere el presente parágrafo se realizarán de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos Une.</p> <p>Parágrafo 2º. Sesiones. El Sistema Nacional de Migraciones tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo al menos dos (2) veces al año y las extraordinarias cuando así lo determine la Secretaría Técnica*.</p> <p>Artículo 26º. Modifíquese el artículo 6º de la Ley 1465 de 2011 el cual quedará así:</p> <p><i>*Artículo 6º. Fondo Especial para las Migraciones. El Sistema Nacional de Migraciones - SNM contará con un Fondo Especial para las Migraciones, el cual funcionará como una cuenta adscrita al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los recursos del Fondo Especial para las Migraciones se destinarán para apoyar económicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera asistencia y protección inmediata a nuestros connacionales en el exterior.</i></p> <p>Parágrafo 1º. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocará a las entidades del Gobierno Nacional competentes para definir presupuestos y mecanismos más inmediatos y operativos de atención a estos casos.</p> <p>Parágrafo 2º. El Ministerio de Relaciones Exteriores definirá la reglamentación de este artículo en un término no superior a seis (6) meses, incluyendo las disposiciones necesarias para garantizar los recursos apropiados para cumplir con los objetivos del Fondo*.</p>
<p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV Acompañamiento a la población retornada</p> <p>Artículo 27º. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país, se hará en coordinación con el grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus veces al interior del ICBF.</p> <p>Artículo 28º. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:</p> <p><i>*Artículo 2º. Requisitos. Los colombianos que viven en el extranjero podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años para acogerse a los beneficios de la presente ley; b. Realizar la inscripción en el Registro Único de Retorno; c. Ser mayor de edad. <p>Parágrafo 1º. Personas excluidas de los beneficios que otorga esta Ley. La presente Ley no beneficia a personas con pena privativa de la libertad por condenas vigentes en Colombia o en el exterior. Tampoco se beneficiarán aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos en contra la administración pública.</p> <p>Parágrafo 2º. La Comisión Intersectorial para el Retorno podrá determinar de manera excepcional omitir la acreditación del tiempo de permanencia en el exterior, para facilitar el acceso a los beneficios de la presente ley en casos de retorno por fuerza mayor, por motivos especiales tales como, causas humanitarias, retorno solidario, graves emergencias, desastres naturales y otros.</p> <p>Parágrafo 3º. La situación migratoria del colombiano residente en el extranjero no será tenida en cuenta para obtener los beneficios expresados en la presente ley.</p> <p>Parágrafo 4º. La Comisión Intersectorial para el Retorno, determinará los mecanismos de verificación de requisitos.</p> <p>Parágrafo 5º. Los connacionales podrán aplicar a un solo tipo de retorno por cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro de los 2 años en que se le reconoce la condición de retornado, podrán</p>	<p>cambiarse a cualquiera de los otros tipos de retorno, con el propósito de alcanzar su estabilización socioeconómica.</p> <p>Parágrafo 6º. Una vez inscrito en el RUR, el ciudadano podrá acceder a la oferta en programas, planes y proyectos que beneficien a esta población. No se podrá presentar nuevas solicitudes de retorno de un mismo connacional en un periodo inferior a (5) años. En todo caso los beneficios fiscales y tributarios únicamente serán otorgados por una sola vez</p> <p>Parágrafo 7º. En caso de coyunturas migratorias en donde se presente retornos masivos o casos particulares de fuerza mayor y causas humanitarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, o quien haga sus veces, establecerá mecanismos o estrategias para el fortalecimiento del Registro Único de Retorno, con la participación obligatoria de las entidades que atienden la población migrante.*</p> <p>Parágrafo 8º. El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en el presente artículo en los siguientes 6 meses a la entrada en vigencia de la Ley*.</p> <p>Artículo 29º. Modifíquese el artículo 3º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:</p> <p><i>*Artículo 3º. Tipos de Retorno. Los siguientes tipos de retorno se consideran objeto de la presente ley:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto armado interno. Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011; b. Retorno humanitario. Es el retorno que realiza el colombiano en situación de vulnerabilidad que ponga en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares. c. Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de origen con el fin de recibir orientación e información de las rutas para emplear sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior y en Colombia; d. Retorno productivo. Es el retorno que realiza el colombiano con el objetivo recibir asesoría para implementar una idea de negocio y/o fortalecer un proyecto productivo en marcha, gestionando la cofinanciación de recursos ligados al Plan de Desarrollo de su departamento y/o municipio de reasentamiento, con sus recursos propios, o de los fondos de emprendimiento que tenga vigentes el Gobierno colombiano a través de las entidades competentes; e. Retorno académico. Es el retorno voluntario que realiza el colombiano que ha obtenido un título en educación superior en el exterior, con el fin de continuar sus estudios y/o emplear sus conocimientos adquiridos en el exterior y en Colombia. <p>El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá dentro del retorno académico, el retorno de capital humano de alto nivel o de aquellos ciudadanos colombianos que han obtenido títulos de doctorado en el extranjero con el fin de aprovechar esos conocimientos adquiridos.</p>

<p><i>Lo anterior sujeto a las políticas en materia de convalidación de títulos del Ministerio de Educación Nacional."</i></p> <p>Artículo 30°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:</p> <p><i>"Artículo 4°. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de retorno. El Gobierno Nacional, a través de las entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno, acompañará a los colombianos que regresen desde el exterior para contribuir a su inserción e integración en Colombia, brindando atención a sus necesidades a través de rutas y ofertas diferenciales en el territorio nacional por un período de 2 años, y que genere oportunidades económicas y sociales que aporten al desarrollo nacional.</i></p> <p><i>Las entidades competentes mencionadas en este artículo coordinarán lo relacionado directamente con el retorno, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.</i></p> <p><i>Para el retorno solidario, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Sistema Nacional de la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, formulará el Plan de acompañamiento al Retorno Solidario que contemple alianzas interinstitucionales y de cooperación, que permita brindar las herramientas para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, inserción laboral, emprendimiento y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así como asistencia social, psicológica y asesoría jurídica en caso de ser necesario, en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, o las leyes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</i></p> <p><i>Para el retorno humanitario, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de Prosperidad Social y en coordinación con las autoridades locales, propondrá alternativas para programas de apoyo que permitan una atención humanitaria de emergencia para atender y eliminar la situación de riesgo del migrante en retorno, así como su vinculación a los programas sociales del estado en su lugar de reasentamiento, previo cumplimiento de los requisitos fijados para los mismos.</i></p> <p><i>En caso de presentarse el regreso masivo de connacionales en situación de vulnerabilidad, se articulará la atención de emergencias con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, con quien se coordinará la atención inmediata de la población retornada y se incluirá en el Registro Único de Retorno.</i></p> <p><i>Para el retorno laboral, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo planteará estrategias de acompañamiento laboral para acceder a orientación ocupacional, capacitación y búsqueda de empleo de la población retornada. Así mismo, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior o formación técnica o tecnológica, reconocidas o autorizadas en Colombia fomentarán la inclusión de los colombianos que retornen como formadores de acuerdo con sus competencias, cualificaciones, capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior o en Colombia.</i></p>	<p><i>En el caso de los Deportistas retornados el Ministerio del Deporte se encargará de apoyarlos y facilitarles las rutas para el acceso a los diferentes programas de vivienda, crédito y demás, disponibles por la entidad para brindar apoyo a los deportistas, en este caso reintegrarse al país y continuar con su ejercicio laboral y la continuidad de su disciplina.</i></p> <p><i>Para el retorno productivo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, integrará en su oferta la capacitación y acompañamiento según su competencia, para el desarrollo y asesoría de emprendimientos y/o fortalecimiento a proyectos productivos en marcha, así como el acceso a capital semilla, cofinanciación de recursos ligados al Plan de Desarrollo de su departamento y/o municipio de reasentamiento, y/o créditos para el mismo fin, en coordinación con las políticas nacionales y regionales de competitividad y emprendimiento. Asimismo, buscará alternativas para incluir a la población retornada como sujeto de las políticas y los fondos de emprendimiento vigentes.</i></p> <p><i>Para el retorno académico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, analizará la inclusión en su oferta institucional de un programa permanente para incentivar el retorno de los colombianos radicados en el exterior, que obtengan títulos en educación superior de los niveles de maestría y doctorado. Este programa permitirá la inscripción de los retornados para la gestión de su vinculación laboral, profesional, y docente, mediante la publicación de sus perfiles académicos y profesionales, en la red del servicio público de empleo.</i></p> <p>Parágrafo 1°. Los tipos de retorno serán complementarios entre sí siempre que se participe de uno de estos a la vez. Los connacionales inscritos en el Registro Único de Retorno podrán acceder a la oferta de los planes de acompañamiento de cada tipo de retorno según sus necesidades y conforme cumplan con los requisitos dispuestos para cada uno de los beneficios y apoyos.</p> <p>Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, formulará un Plan General de Acompañamiento al Retorno, incluyendo los planes de acompañamiento por tipo de retorno y la oferta de entidades del Estado. El cual será evaluado en su impacto anualmente.</p> <p>Parágrafo 3°. Los retornados sólo podrán acceder por una vez a los beneficios de exención tributaria que dispone la presente Ley.</p> <p>Parágrafo 4°. En el entorno productivo, aquellos emprendimientos y/o fortalecimiento de proyectos productivos en marcha, que tengan acceso a capital semilla y/o que sean cofinanciados con recursos de las entidades territoriales deberán garantizar la generación de empleo."</p> <p>Artículo 31°. Modifíquese el artículo 9° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:</p>
<p><i>"Artículo 9°. Acompañamiento institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con cargo a Colombia Nos Une y el Fondo Rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, implementará, supervisará y gestionará los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno – CRORE, para lo cual, instalará oficinas regionales de operación estable en las zonas de origen migratorio y retorno. Dichas oficinas atenderán a la población objeto de la presente Ley.</i></p> <p><i>Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional a nivel local y regional de que trata el presente artículo, el DPS y Colombia Nos Une en articulación con los departamentos y municipios estructurarán e implementarán programas para la población retornada, con especial énfasis en atención humanitaria, emprendimiento y reinserción laboral.</i></p> <p><i>Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional, los municipios y departamentos que identifiquen la necesidad de coordinar acciones de atención a población colombiana retornada conformarán, acorde a sus necesidades, Redes Interinstitucionales de Atención al Migrante como espacios de articulación de entidades públicas, sector privado y organismos de cooperación, con el objetivo de:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Referenciar ante los CRORES, o inscribir directamente en caso de que no haya presencia de estos centros en el departamento, a la población retornada en el Registro Único de Retorno.</i> <i>Implementar el plan de acompañamiento al retorno formulado por la autoridad municipal o departamental.</i> <i>Determinar la oferta local para la población retornada y núcleos familiares mixtos.</i> <i>Consolidar rutas de atención y escalar las problemáticas identificadas en la prestación de servicios ante la Comisión Intersectorial para el Retorno o a la Comisión Nacional Intersectorial de Migración".</i> <p>Artículo 32°. Convalidación. El Ministerio de Educación Nacional será el encargado del proceso de reconocimiento de un título de Educación Superior, otorgado por una institución en el exterior, legalmente autorizada por la autoridad competente del respectivo país, para expedir título de educación superior; de tal forma que con dicho proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las instituciones de Educación Superior colombianas.</p> <p>Parágrafo 1°. Los títulos obtenidos a través de la modalidad virtual y a distancia de instituciones de educación legalmente autorizadas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos en educación superior, serán susceptibles del trámite de convalidación conforme a la normatividad vigente.</p> <p>Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional actualizará, de considerarse necesario, el proceso de convalidación dentro del marco de las disposiciones legales, y sobre los principios de buena fe, economía, celeridad, calidad; y coherencia con los tratados internacionales suscritos en la materia; y dará prevalencia al criterio de acreditación para surtir el trámite.</p> 	<p>Parágrafo 3°. El Ministerio de Educación Nacional actualizará la normatividad vigente en materia de convalidación.</p> <p>Artículo 33°. Homologación de Estudios Superiores cursados en el exterior. Agréguese un inciso nuevo al art 62 de la Ley 962 de 2005 que quedará así:</p> <p><i>"Artículo 62. Homologación de estudios superiores cursados en el exterior. En adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior será realizada directamente por la institución de Educación Superior en la que el interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del Ministerio de Educación Nacional.</i></p> <p><i>Las Instituciones de Educación Superior del país podrán homologar, reconocer créditos, saberes o competencias, adquiridos por los estudiantes de una institución de educación superior extranjera cuyo título no fue objeto de convalidación para culminar sus estudios en Colombia, o aquellos títulos denominados universitarios no oficiales o propios los cuales fueron otorgados con posterioridad a la vigencia de la Ley 1753 de 2015."</i></p> <p>Artículo 34°. Determinación de Equivalencia General. Para el reconocimiento de estudios, a excepción de pregrados en áreas de la salud, que no cuenten con una equivalencia dentro de la oferta académica nacional, el Ministerio de Educación Nacional determinará, a través de la CONACES o el órgano técnico que el Ministerio designe para el efecto, la pertinencia de los estudios adelantados y la denominación respecto del sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior del país de origen del título, determinando el área de conocimiento del título sometido al trámite de convalidación, de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>Artículo 35°. Determinación de Equivalencia en Áreas de la Salud. El Ministerio de Educación Nacional convocará al Ministerio de Salud y Protección Social o a quien este designe, para conocer su concepto, cuando el título que se presenta a convalidación, no haga parte de la oferta académica de programas autorizados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con registro calificado vigente, con el propósito de evaluar la conveniencia de incorporar en la oferta nacional, nuevas denominaciones y titulaciones de programas en salud del nivel de posgrado.</p> <p>Para tales efectos el Ministerio de Salud y de la Protección Social realizará la evaluación del Sistema Único de Habilitación de Servicios de aquellas denominaciones y/o títulos convalidados que no cuenten con una oferta educativa dentro del territorio nacional.</p> <p>Artículo 36°. Promoción de Proyectos Productivos. Colombia Nos Une, a través de los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE) (junto con DNP, gobiernos locales y demás entidades públicas) propenderá por la promoción y fortalecimiento de emprendimientos e ideas de negocios de la población retornada.</p>

<p>Artículo 37º. Promoción de la Ley Retorno en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá el conocimiento de la Ley 1565 de 2012, la cual establece incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero, concernientes al retorno de los colombianos. Asimismo, brindará acompañamiento integral a aquellos que voluntariamente desean retornar al país, acorde a los diferentes tipos de retorno existente.</p> <p>Artículo 38º. Promoción de la Ley de Emprendimiento en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá el conocimiento del artículo 53 de la Ley 2069 de 2020, la cual establece el marco regulatorio para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas en Colombia. Asimismo, brindará el acompañamiento e información para aquellos colombianos interesados en retornar y en crear empresa en Colombia.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO V Integración socioeconómica y productiva de los Migrantes</p> <p>Artículo 39º. Política de Integración socioeconómica. El Gobierno Nacional fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, retornados y las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial y territorial, como oportunidad de desarrollo económico para el país.</p> <p>Parágrafo. Para esos efectos, se impulsarán procesos de caracterización que contengan información relacionada con la identificación personal y el perfil socio-ocupacional, entre otros criterios, de la población migrante y las comunidades de acogida.</p> <p>Artículo 40º. Fomento al empleo. A efectos de facilitar la inserción en el mercado laboral de la población migrante, que contribuya al desarrollo y redunden en beneficio de toda la población, y bajo el principio del trabajo decente, el Gobierno Nacional, a partir de la identificación de las necesidades de los diferentes sectores de la economía, promoverá acciones tendientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación laboral; Incrementar las opciones de certificación de competencias y de formación para el trabajo para esta población; Definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contribución al Sistema general de Seguridad Social; Explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas de alta concentración de población migrante y aquellas de baja concentración, en coordinación con los entes territoriales; Impulsar canales de articulación con el sector empresarial que promuevan la generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de migrantes en el país; Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral y el trabajo forzoso. 	<ol style="list-style-type: none"> Evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de los migrantes, y que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico del país. <p>Parágrafo. El Ministerio del Trabajo implementará y evaluará las normas, los procedimientos, técnicas e instrumentos encaminados a orientar la política en materia de migraciones laborales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.</p> <p>Artículo 41º. Desarrollo Económico Local. El Gobierno Nacional promoverá estrategias de desarrollo regional en los territorios receptores que repercutan en beneficio de todos los habitantes mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incentivos para atraer la inversión nacional y extranjera. Programas de fomento de competitividad en zonas fronterizas y de alta concentración de población migrante. Consolidación de alianzas público-privadas para la inclusión social y económica de comunidades en situación vulnerable, incluyendo a los migrantes. <p>Artículo 42º. Emprendimiento. El Gobierno Nacional propenderá por el acceso efectivo y en condiciones de equidad a los mecanismos de emprendimiento promovidos por el Estado, tanto a los nacionales colombianos dentro y fuera del país, como a los migrantes con estatus regular en Colombia.</p> <p>Artículo 43º. Inclusión financiera. El Gobierno Nacional promoverá acciones tendientes a permitir el acceso de la población migrante, con estatus regular en el país, a los productos y servicios financieros, a través de la sensibilización de las entidades financieras, el intercambio eficiente de información entre entidades públicas y privadas para facilitar la debida identificación de los migrantes ante las entidades financieras, el desarrollo de programas de educación financiera para población migrante y de acogida; y las demás que el Gobierno defina para permitir la inclusión financiera de los migrantes.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO VI Fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior</p> <p>Artículo 44º. Colombianos en el Exterior. Los nacionales colombianos en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones recibirán la protección y asistencia de las misiones consulares, en el marco de los derechos cobijados por la Constitución Política y los tratados y leyes aplicables, especialmente de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1963, cualquiera sea su condición migratoria, con el respeto de la normatividad interna del país receptor.</p> <p>El colombiano migrante deberá informarse de los derechos y deberes que tiene en su condición de migrante en el exterior, para lo cual el Estado colombiano a través de sus misiones consulares deberá facilitar el acceso a dicha información que incluya sitios de atención, información sobre derechos, e información sobre la convención de migrantes.</p>
<p>Los colombianos en el exterior tienen derecho a que el Estado vele por las garantías del debido proceso, de acuerdo con las leyes y disposiciones del Estado receptor.</p> <p>Artículo 45º. Información demográfica y caracterización. El Ministerio de Relaciones Exteriores mejorará los registros existentes de los colombianos residentes en el exterior de manera que se cuente con mejor información para la implementación de planes, y proyectos que estén disponibles para esta población.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces, en colaboración con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, como cabeza del Sistema Estadístico Nacional - SEN, propenderán por la implementación del Plan de Acción definido en el marco de la Mesa Intersectorial de Estadísticas de Migración adscrita al SEN, para la producción, mejoramiento, actualización y aprovechamiento estadístico de la información relacionada con la población migrante nacional, extranjera y retornada.</p> <p>Parágrafo 1º. La información a la cual se refiere el presente artículo estará sometida a reserva estadística en los términos del artículo 5º de la Ley 79 de 1993 y su tratamiento deberá efectuarse conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas concordantes.</p> <p>Parágrafo 2º. Deberá ampliarse la información de datos del Registro Consular, de modo tal que pueda aplicarse en el uso de información de caracterización de la población residente en el exterior.</p> <p>Parágrafo 3º. Se propenderá por el fortalecimiento del registro consular virtual y la actualización de las bases de datos consulares anualmente; con el fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con un censo actualizado de los colombianos residentes en el exterior. Para lo anterior se utilizarán de forma permanente, campañas virtuales que promuevan dichos registros.</p> <p>Parágrafo 4º. El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, realizará un censo nacional para recopilar información social, económica y demográfica de las familias con miembros en el exterior – familias transnacionales. Con base en los resultados obtenidos, el gobierno nacional desarrollará e implementará una política pública para fortalecer la estructura de las familias transnacionales y mitigar los impactos de las migraciones internacionales en las familias, niños, niñas y adolescentes (NNA). Asimismo, se desarrollará un estudio acerca del impacto que tienen la migración en las familias, con un énfasis en el impacto de la migración parental en los NNA.</p> <p>Artículo 46º. Canales de comunicación. Con el fin de establecer canales de comunicación que permitan que los colombianos en el exterior conozcan la oferta de servicios, planes y estrategias de política pública que se generan desde sus regiones de origen, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá fortalecer la gestión interinstitucional con los entes territoriales de los departamentos con mayor experiencia migratoria. Asimismo, hará uso de todos sus canales digitales y redes de información.</p>	<p>Artículo 47º. Vinculación de los nacionales en el exterior con el país. El Gobierno colombiano, coordinado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces diseñará con los consulados, iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas a fortalecer el tejido social y promover actividades entre colombianos fuera del país.</p> <p>El Gobierno Nacional gestionará iniciativas institucionales para los colombianos en el exterior y sus familias, con el fin de ofrecer servicios que contribuyen a elevar su calidad de vida, mediante oportunidades de formación, facilidades en materia de seguridad social, acercamiento a los sistemas financieros, convalidación de títulos y condiciones favorables para el transporte de menaje profesional, industrial y doméstico.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al ciudadano o quien haga sus veces, adelantará programas especiales de protección y asistencia de los colombianos en el exterior, en aquellas materias de que trata el artículo 3º de la Ley 76 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicione o sustituyan; e igualmente promoverá con las comunidades residentes en el exterior, la preservación y afirmación de los valores históricos, culturales y sociales de nuestra nacionalidad.</p> <p>Colombia Nos Une implementará programas de vinculación y participación de la diáspora nacional en la realización de actividades y proyectos empresariales, culturales, académicos, investigativos y de desarrollo tecnológico e innovación, a través de entidades públicas y privadas en el territorio nacional. Los Consulados colombianos deberán promover donde sea posible y de acuerdo con el interés de participación en las convocatorias, la realización de encuentros con la comunidad colombiana presente en su circunscripción que permita identificar las necesidades y propuestas.</p> <p>El Gobierno Nacional garantizará al Fondo Especial para las Migraciones – FEM los recursos suficientes para atender los temas de asistencia de colombianos en el exterior que le competan, con especial énfasis en la atención de coyunturas en donde se presenten retornos masivos producto de emergencias graves y desastres naturales, entre otros.</p> <p>El Gobierno Nacional diseñará incentivos para promover la inscripción de los connacionales en el registro consular.</p> <p>Artículo 48º. Remesas. El Gobierno Nacional adelantará campañas y estrategias con el fin de incentivar el uso productivo de las remesas en programas relacionados con la promoción de inversión en el país. Dentro de éstos, serán tenidos en cuenta la adquisición de vivienda, vehículos de inversión; así como iniciativas para brindar el acompañamiento a esta población en proyectos productivos. Dichas herramientas serán divulgadas y compartidas en las redes y canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o quien haga sus veces.</p>

<p>Artículo 49°. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de trámites. Para garantizar el derecho de los colombianos en el exterior a acceder a los servicios del Estado, las entidades encargadas de los trámites efectuados por los connacionales a través de las oficinas consulares de Colombia en el mundo, y de los sistemas virtuales, deberán aplicar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera progresiva en cada uno de los trámites que se adelanten en ellas, así como los principios de celeridad, economía y simplicidad, contemplados en la normativa nacional. Así mismo se garantizará la orientación, acompañamiento y los medios para acceder a los servicios virtuales por parte de los ciudadanos en condición de discapacidad y aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores utilizará sus herramientas informativas en sus instalaciones y vía online, para ilustrar a los ciudadanos cuando soliciten el pasaporte, sobre las políticas migratorias de los países a donde se vayan a dirigir.</p> <p>Parágrafo 2°. Para garantizar dicha eficiencia y austeridad en el gasto, se permitirá que las oficinas diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, puedan utilizar redes sociales como mecanismo de comunicación informativo para la comunidad, y canales de comunicación propios. Los cuales tendrán una reglamentación de uso y propiedad especial que será establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinada por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano en un plazo no mayor a seis (6) meses de expedida la presente Ley.</p> <p>Artículo 50°. Atención y promoción cultural de niños y niñas colombianos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos Une diseñará e implementará una estrategia de promoción cultural colombiana a la población de niñas y niños entre los 0 a 12 años, que estén residiendo en el exterior o que sean hijos de padres colombianos y hayan nacidos en el extranjero.</p> <p>Artículo 51°. Promoción de la Ley de Turismo en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá el conocimiento del artículo 20 de la Ley 2068 de 2020, la cual crea, en la Ley de Turismo, un programa de promoción turística destinado a los colombianos en el exterior, coordinado a través de Colombia Nos Une y CO-nectados de Procolombia.</p> <p>Artículo 52°. Asistencia social y servicios a los colombianos en el exterior y retornados. El Ministerio de Relaciones Exteriores elevará el grupo interno de trabajo (GIT) de Colombia Nos Une, a la Dirección de Colombia Nos Une, la cual estará bajo coordinación directa del Viceministerio de Relaciones Exteriores, funcionando con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior, con el fin de fortalecer la formulación de las políticas públicas relacionadas con los colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados, y población migrante en territorio nacional, y afianzar un servicio oportuno, directo y eficiente a la población colombiana en el exterior; teniendo como prioridad garantizar la participación de la población colombiana en el exterior en la formulación y creación de políticas públicas nacionales relativas a los colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados y</p>	<p>población migrante en territorio nacional, así como también la orientación a los retornados en materia de oportunidades de emprendimiento, productividad y empleo, educación y formación, trámites ciudadanos, vivienda y salud.</p> <p>Parágrafo. La entrada en funcionamiento de esta Dirección, y los ajustes necesarios que sobre la estructura deba realizar el Gobierno Nacional, se deberá realizar una vez entre en vigencia la presente Ley; teniendo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un plazo de seis (6) meses a partir de la firma de la sanción de la Ley para modificar la estructura que permita transformar el GIT de Colombia nos Une en la Dirección prevista en este artículo. Asimismo, en aras de respetar el principio de austeridad, para iniciar su nueva labor no deberá generar gastos adicionales de personal, ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado.</p> <p>Artículo 53°. Acreditación del permiso de salida de menores en Consulados. Los Consulados de Colombia en el exterior, podrán expedir de manera virtual los permisos de salida del país a menores de edad a los que se refiere el artículo 110 de la ley 1098 de 2006, a través de la validación de la información personal de los padres, registrada previamente en el consulado respectivo.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia establecerán un mecanismo no presencial de validación de información personal de los padres, implementado y desarrollado a través de los Consulados de Colombia en el exterior.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO VII Extranjeros en Colombia</p> <p>Artículo 54°. Información al migrante extranjero. El Estado proporcionará al extranjero en cualquier momento, información sobre los requisitos para su ingreso, permanencia, residencia y salida del territorio nacional, y cualquier otra información que sea necesaria.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, promoverán mecanismos presenciales y virtuales que faciliten el acceso a la población extranjera a información de interés.</p> <p>Artículo 55°. Deberes de los extranjeros. Son deberes de los extranjeros:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acatar la Constitución y la ley y respetar y obedecer a las autoridades. b. Exhibir cuando le sean requeridos por las autoridades nacionales, su pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible. c. Ingresar y salir del país a través de los puestos de control migratorio. d. Mantener su situación migratoria regular para la permanencia o residencia en el territorio nacional, y pagar oportunamente las tasas, y/o en su caso las sanciones que le correspondan.
<ol style="list-style-type: none"> e. Inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. f. Proporcionar oportunamente a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia la información íntegra y completa que corresponda para mantener actualizada su información migratoria, entre la que se incluya, así como todo cambio en su domicilio, dentro del término estipulado en la normatividad que regule la materia. g. Desarrollar únicamente las actividades autorizadas en la visa o permiso de permanencia otorgado. h. Presentarse personalmente ante la autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, al ser requerido mediante escrito por el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o por sus delegados, en los términos señalados en la correspondiente citación. i. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. j. Los extranjeros en el territorio nacional tienen el deber y el derecho de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades de origen, así como la que acredite su condición migratoria en Colombia. k. Abstenerse de promover y/o realizar cualquier comportamiento y/o acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguridad nacional. <p style="text-align: center;">CAPÍTULO VIII Asuntos de la Nacionalidad y la documentación migratoria</p> <p>Artículo 56°. De la nacionalidad colombiana. La nacionalidad colombiana se adquiere en las formas señaladas por el artículo 96 de la Constitución Política.</p> <p>El reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento en los términos del numeral 1 del artículo 96 de la Constitución Política, será de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con arreglo a las normas vigentes.</p> <p>Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción, en los términos del numeral 2 del artículo 96 de la Constitución Política, serán conocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la delegación realizada por parte del Presidente de la República mediante el Decreto 1067 de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>Artículo 57°. Derecho a obtener pasaporte. Todo nacional tiene derecho a obtener su pasaporte, dentro o fuera del territorio nacional, de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia.</p> <p>Parágrafo. El estado colombiano reglamentará la expedición del pasaporte diplomático u oficial. Para tal fin establecerá las condiciones y requisitos en coordinación con las entidades del orden nacional, en los siguientes 6 meses de entrada en vigencia de la presente ley.</p>	<p>Artículo 58°. Tipos de documentos de viaje. Los documentos de viaje son: el pasaporte, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, la tarjeta de identidad, el registro civil de nacimiento, el documento de identidad de otro Estado, y el documento expedido para los refugiados, apátridas y otras personas previstas por la normatividad vigente en la materia, siempre que se utilice con este propósito de conformidad con los convenios internacionales de los que Colombia es parte.</p> <p>Artículo 59°. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en el territorio nacional bajo el principio de la discrecionalidad y soberanía del Estado, la cual acredita que el portador extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un plazo de permanencia y actividad determinados.</p> <p>Conforme a la facultad residual reglamentaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, los aspectos procedimentales, administrativos y de trámite propio de las Visas, se regularán a través de Resolución Ministerial. La expedición de visas, acorde con los planes de desarrollo e inversión globales o sectoriales, públicos o privados, se deberá regular con atención a las prioridades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano.</p> <p>Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio de las medidas legales o reglamentarias transitorias establecidas en la materia, la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en Colombia se constituye habiendo sido titular por tres (3) años continuos e ininterumpidos de la visa que acredite tanto su regularidad migratoria en el país como su intención o ánimo de permanecer en el territorio nacional.</p> <p>El solo hecho de que un extranjero habite en el territorio nacional de manera accidental, estacional o en calidad de visitante no constituye residencia con vocación de permanencia en el país. La reglamentación establece los tipos de visas que permiten concluir su residencia con vocación de permanencia en Colombia.</p> <p>Parágrafo 2°. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades, todas diferentes de la colombiana, deberán informar esta condición al momento de su ingreso al país, pudiendo ostentar sólo una nacionalidad en dicho ingreso y durante su permanencia en el territorio colombiano. Los extranjeros titulares de visas con vigencias superiores a tres (3) meses deberán identificarse en el territorio nacional con la cédula de extranjería expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia correspondiente a la nacionalidad inscrita en la visa. Los extranjeros titulares de visas con vigencias inferiores a tres (3) meses, así como los menores de siete (7) años sin importar el tipo de visa de la que sean titulares, podrán identificarse con el pasaporte vigente de su nacionalidad acompañado de la visa o del permiso de ingreso también vigentes.</p> <p>Artículo 60°. Permisos. Es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia otorgar los documentos que estime pertinente en desarrollo del principio de libre movilidad, a los visitantes extranjeros que ingresen al territorio nacional sin ánimo de establecerse en el país y que no</p>

<p>requieran visa; sus características, procedimiento y trámite será reglamentado e implementado por las autoridades en materia migratoria mediante acto administrativo.</p> <p>Artículo 61°. Situación o condición migratoria irregular. El extranjero incurre en situación migratoria irregular al ingresar al territorio nacional evadiendo el control migratorio, y/o cuando a pesar de haber ingresado de manera regular al país, excedió su tiempo de permanencia por vencimiento de su visa o permiso. En ambos casos los extranjeros serán objeto de las medidas sancionatorias que establezca la ley.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IX De la protección internacional a los Extranjeros</p> <p>Artículo 62°. Refugio. A efectos de la presente Ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él o; 2. Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público. 3. Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual. <p>La solicitud de reconocimiento de esta condición se hará únicamente con la presencia del solicitante en el territorio nacional.</p> <p>Parágrafo. El reconocimiento de la condición de refugiado será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el estudio de las solicitudes, como en el reconocimiento de esta condición.</p> <p>Artículo 63°. Procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. El reconocimiento de la condición de refugiado estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con el procedimiento establecido por el Decreto 1067 de 2015 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.</p>	<p>Artículo 64°. Asilo. A efectos de la presente Ley, se entenderá por solicitante de asilo exclusivamente las personas que tengan un temor razonable de persecución por motivos o delitos políticos, y por delitos políticos concurrentes en que no procede la extradición.</p> <p>El asilo no podrá ser invocado contra acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.</p> <p>El reconocimiento de esta condición se podrá conceder dentro del territorio nacional o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares de Colombia en el Exterior, de acuerdo con la normativa internacional aplicable.</p> <p>Parágrafo. El reconocimiento de la condición de asilado y el procedimiento para el otorgamiento de esta condición será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>Artículo 65°. Personas Apátridas nacidas en el exterior. Las personas nacidas en el exterior en situación de apatridia deberán presentar la solicitud para el reconocimiento de la condición de persona apátrida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la reglamentación establecida para el efecto por este Ministerio.</p> <p>Durante el procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal en el territorio nacional del solicitante. Una vez se le reconozca la condición de persona apátrida, se le otorgará un documento de viaje, en el cual se estampará una visa de residente para su identificación y regularización.</p> <p>La persona nacida en el exterior reconocida como apátrida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar de manera gratuita la nacionalidad colombiana por adopción, una vez haya cumplido con el término de un (1) año de domicilio, contado a partir de la expedición de la visa de residente.</p> <p>El solicitante gozará de las facilidades para su naturalización que para el efecto disponga el Ministerio de Relaciones Exteriores en la reglamentación de la presente ley.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá adelantar el trámite de nacionalidad colombiana por adopción, dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud de naturalización de la persona reconocida como apátrida.</p> <p>Parágrafo. En aplicación del principio del interés superior, los niños, niñas y adolescentes nacidos en el exterior podrán solicitar el reconocimiento de la condición de persona apátrida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez este Ministerio reconozca tal condición, les otorgará la nacionalidad colombiana por adopción mediante acto administrativo. Este acto se comunicará a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición del respectivo documento de identificación colombiano a favor del niño, niña y adolescente. Durante el procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal en el territorio nacional del niño, niña y adolescentes.</p>
<p>Artículo 66°. Procedimiento para reconocimiento de la condición de persona apátrida. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el competente para tramitar, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona apátrida, presentadas por las personas a las que se refiere el numeral 2 del artículo 7 de la presente Ley.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona apátrida, de personas nacidas en el exterior y en Colombia, el cual tendrá un término de duración no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la presentación de la solicitud ante el Ministerio cuando la persona haya nacido en el exterior, o desde la remisión de la solicitud por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil al Ministerio, cuando la persona haya nacido en territorio colombiano. En el procedimiento se observarán todas las garantías del debido proceso.</p> <p>Artículo 67°. Personas apátridas nacidas en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de reconocimiento de la condición de persona apátrida nacida en Colombia y los documentos que soporten el caso concreto para determinar tal condición, de acuerdo con el procedimiento establecido en la reglamentación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>El Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá acto administrativo mediante el cual determinará si el solicitante se encuentra en situación de apatridia.</p> <p>La Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en el acto administrativo que reconoce la condición de persona apátrida expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, procederá a reconocer la nacionalidad colombiana por nacimiento dentro de los tres meses siguientes a la comunicación del acto administrativo. El procedimiento y requisitos para este efecto serán reglamentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.</p> <p>Parágrafo. Durante este procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal del solicitante en el territorio nacional.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO X Disposiciones en el marco de las funciones y competencias de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia</p> <p>Artículo 68°. Acceso a información. Para el cabal cumplimiento de la función migratoria las entidades del orden nacional y regional están en la obligación de reportar o facilitar el acceso tecnológico a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a los antecedentes, requerimientos y anotaciones judiciales que se generen en contra de los ciudadanos nacionales y extranjeros, como mecanismo para la lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional, respetando las disposiciones de la ley 1581 de 2012, las que la modifiquen o sustituyan.</p>	<p>De igual manera, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia llevará un registro judicial de los extranjeros condenados y vinculados a procesos penales por autoridad judicial competente.</p> <p>Artículo 69°. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de procesos migratorios. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería hará uso de las nuevas tecnologías para fortalecer los procedimientos de facilitación y priorización en el control migratorio, integrando procesos de seguridad y verificación automática de documentos de viaje, antecedentes y restricciones migratorias, entre otros requisitos.</p> <p>Para garantizar la seguridad y plena identificación de las personas, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio y cumplimiento de sus funciones como autoridad migratoria, podrá integrar soluciones tecnológicas que permitan la verificación y autenticación de la identidad de nacionales y extranjeros a través de los mecanismos y convenios de interoperabilidad que establezca con entidades nacionales e internacionales, de conformidad con los tratados internacionales y normas vigentes. Con este objetivo podrá utilizar, solicitar y acceder al sistema de información como a las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil.</p> <p>Artículo 70°. Ingreso y salida del país de los niños, niñas y adolescentes. Para el ingreso y salida del país de niños, niñas y adolescentes, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en cumplimiento de sus funciones dará cabal aplicación a las normas que las autoridades competentes hayan referido para tal fin, garantizando prevalentemente el ejercicio pleno de sus derechos y su protección integral, bajo el principio de favorabilidad, al momento de efectuar los controles migratorios.</p> <p>Artículo 71°. Creación de nuevos puestos de control fronterizo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio de sus competencias evaluará la necesidad y de acuerdo con sus estudios técnicos, podrá proponer la creación y el fortalecimiento de la infraestructura de los Puestos de Control Migratorio terrestres ubicados en los municipios de tránsito fronterizo, en las zonas más vulnerables de todo el país, en coordinación con las entidades que participan en ejercicio de sus funciones, en los Puntos de Control Migratorio. Lo anterior, de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y las apropiaciones y asignaciones presupuestales autorizadas por el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación correspondiente.</p> <p>Artículo 72°. De las Empresas transportadoras o medios de transporte internacional o nacional. Para todos los efectos relacionados con el control y obligaciones migratorias, se consideran empresas transportadoras o medios de transporte internacional o nacional formalmente constituidas, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional de personas y/o carga, vía aérea, marítima, fluvial o terrestre.</p>

CAPÍTULO XI
Disposiciones Complementarias

Artículo 73°. Prevención y Asistencias a víctimas del delito de Trata de Personas e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a través de la Comisión Interinstitucional en la

Lucha contra la Trata de Personas adoptará las medidas de prevención, protección, asistencia, investigación y judicialización necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas del delito de trata de personas, tanto, internas como externas. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de igual manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de estas medidas.

Artículo 74°. Prevención y Atención a personas objeto de tráfico ilícito de migrantes e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a través de la Comisión Intersectorial en la Lucha contra el Tráfico Migrantes adoptará las medidas de prevención, protección, atención, investigación y judicialización necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas objeto de Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de igual manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de estas medidas.

Artículo 75°. Convenios de intercambio de información. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrán celebrar convenios interadministrativos con entidades oficiales y organismos internacionales para el intercambio de información, que permita cumplir con las funciones misionales propias de la Entidad.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá establecer alianzas entre los organismos de la lucha contra la trata, la migración y el desarrollo, las organizaciones internacionales y las partes interesadas de la sociedad civil centradas en las mujeres y las niñas, incluidas las organizaciones comunitarias de grupos afectados por la trata o las medidas contra la trata, a fin de recopilar, intercambiar, y analizar datos de manera sistemática, con el objetivo de comprender las tendencias en la trata de mujeres y niñas, y aplicar estrategias específicas basadas en los derechos humanos.

Artículo 76°. Tratamiento de datos personales. En virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, las entidades a cargo de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano -PIM-, deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada para garantizar el debido tratamiento de los datos personales. Dichas medidas deben ser apropiadas, efectivas, útiles, eficientes, oportunas y demostrables. Especial énfasis realizarán en garantizar la seguridad, la confidencialidad, la calidad, el uso y la circulación restringida de esa información.

Artículo 80°. Adiciónese un numeral al Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 6° Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios:

[...]

10. Principio de Progresividad: Es obligación del Estado garantizar la continuidad en la garantía, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohibir el retroceso en esta materia.

Este principio exige el uso del máximo de recursos disponibles por parte del Estado para la satisfacción de los derechos".

Artículo 81°. Modifíquese el Artículo 7° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 7°. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Derechos que deben ser efectivos tanto para todas las mujeres dentro del territorio nacional, como para las connacionales que se encuentren en el exterior."

Artículo 82°. Adiciónese un numeral al Artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 9o. Medidas de sensibilización y prevención. Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

El Gobierno Nacional:

10. A través del Servicio Exterior a cargo de la Cancillería colombiana, creará un "Protocolo estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violencia, que se encuentren en el exterior", el cual permita actuar de manera oportuna para prevenir, identificar, atender y canalizar a las mujeres a servicios especializados de apoyo.

Dicho protocolo estandarizado deberá contener como mínimo una ruta de atención que considere las siguientes condiciones y/o recursos:

- 1. Recopilación de datos de línea base.*
- 2. Disposición de la oferta consular de servicios de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, en lugares visibles, que faciliten el acceso al material informativo.*
- 3. Condiciones físicas en las oficinas consulares que garanticen confidencialidad y privacidad.*

Artículo 77°. Prohibición y/o limitación al control y vigilancia en materia migratoria o de seguridad. Para el ejercicio de los controles migratorios y de seguridad, en terminales aéreos, terrestres o portuarios no existirán áreas restringidas o vedadas a las autoridades competentes.

Artículo 78°. Reserva. Tendrá carácter reservado, el registro de extranjeros, los documentos que contienen información judicial e investigaciones de carácter migratorio y/o sobre el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, por estar relacionados con la seguridad nacional, así como por involucrar datos sensibles de acuerdo con lo establecido también en la Ley de 1581 de 2012.

No obstante, a lo anterior y con sujeción a las disposiciones de la Ley Habeas Data, las que la modifiquen o sustituyan, la información podrá ser entregada a:

- a. Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones respecto de la persona registrada.
- b. Las autoridades y entidades que cumplan funciones administrativas que siendo constitucional y/o legalmente competentes para ello necesitan conocer la información para el debido ejercicio de sus funciones o por virtud de disposición legal expresa que lo establezca.
- c. El titular del dato o información.
- d. Los terceros que cuenten con la facultad expresa mediante poder especial debidamente otorgada por el titular de la información, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 o por virtud de disposición legal expresa que la establezca.
- e. Los padres respecto de sus hijos menores no emancipados.
- f. El curador respecto de las personas declaradas interdictas legalmente.

Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata el presente artículo, los funcionarios que la soliciten, señalados en los literales a y b, deberán contar con la autorización que establezca el ordenamiento jurídico.

Igualmente les corresponde a todos aquellos quienes acceden a la información el deber de asegurar la reserva de los documentos y datos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en el presente artículo.

Artículo 79°. Modifíquese el numeral 7° del Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 6° Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios:

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta Ley a través de una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional o fuera de él, por medio del servicio exterior de la República."

- 4. Canales permanentes de atención especializada.*
- 5. Personal consular sensibilizado y capacitado permanentemente en la detección, el manejo preventivo y la atención de casos de violencia contra las mujeres.*
- 6. Coordinación interinstitucional y con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación entre las áreas del consulado, así como entre consulados, que permita una detección y canalización oportuna de las mujeres víctimas, a un área de atención y servicios adecuados que garanticen su protección.*
- 7. Coordinación con las áreas de las entidades cuya función es la protección de los derechos humanos como lo son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.*
- 8. Creación y sostenimiento de Redes de Servicios Especializados."*

Artículo 83°. Modifíquese el Artículo 8° de la Ley 1212 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 8°. Las siguientes actuaciones se encuentran exentas del cobro de las tasas que se regulan en la presente ley:

- 1. La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites de extradición solicitados por la vía diplomática o por la vía que acepten los tratados internacionales aplicables para Colombia.*
- 2. Las previstas en los tratados internacionales vigentes para Colombia.*
- 3. Los trámites realizados por la vía diplomática y consular, sujetos a reciprocidad.*
- 4. La protocolización de las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación.*
- 5. Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales en el exterior en materia penal y en asuntos relativos a la protección del menor.*
- 6. La expedición del certificado de supervivencia en el exterior.*
- 7. La apostilla o legalización de las copias, extractos y certificados relativos a prestaciones sociales a colombianos.*
- 8. La expedición de pasaportes a colombianos que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN o el puntaje equivalente al mismo y se encuentren en territorio colombiano, siempre y cuando esté inmerso en alguna de las siguientes condiciones:*
 - a. Personas con discapacidad y un familiar acompañante.*
 - b. Personas adultas mayores de 62 años.*
 - c. Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en el exterior.*
 - d. Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido del ICBF.*
 - e. Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares.*
 - f. Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior*
 - g. Que sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico.*
- 10. Los Consúles podrán expedir pasaporte provisional exento de una hoja, válido únicamente para regresar a Colombia, con vigencia hasta de treinta (30) días, a los nacionales colombianos que se encuentren en una de las siguientes situaciones:*

<p>a. Deportados; b. Expulsados; c. Repatriados; d. Polizones; e. En caso de existir orden de autoridad competente para no salir de Colombia, no expedir pasaporte o cancelar el pasaporte que tenga vigente un connacional; f. Estado de vulnerabilidad o indefensión y siempre que el solicitante cumpla con los requisitos señalados por los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso. g. Otras situaciones: fuerza mayor, caso fortuito o situaciones extraordinarias a juicio de la autoridad expedidora.</p> <p>11. Los Cónsules podrán expedir pasaporte ordinario a los nacionales colombianos a solicitud del ACNUR, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, en desarrollo de asistencia consular o de cooperación judicial, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces.</p> <p>12. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, a solicitud del ACNUR o de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC Colombia o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces.</p> <p>13. La apostilla o legalización de documentos relacionados con los nacidos vivos o menores que se encuentren en proceso de establecimiento de derechos, a previa solicitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.</p> <p>Parágrafo. En caso de que el solicitante no posea documento de identificación colombiano, los cónsules indagarán, previamente de la expedición del pasaporte provisional exento, la calidad de nacional colombiano a fin de obtener prueba sumaria de esta, de lo cual se dejará constancia en el respectivo formulario, y de acuerdo con lo reglamentado para la expedición de pasaportes.</p> <p>Artículo 84°. Derechos concordantes con la PIM. Para efectos de la aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta los siguientes derechos ya consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derecho a la Unidad Familiar: La familia, elemento natural y fundamental de la sociedad tiene el derecho a vivir unida, recibir respeto, protección, asistencia y apoyo conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales. La reglamentación de esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este derecho en materia migratoria. 2. Derecho de libre circulación y residencia: Todo ciudadano colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de este. Igualmente, aquellos extranjeros que se encuentren de forma regular en el país tienen derecho a circular, permanecer y salir de él, con sujeción a las disposiciones legales vigentes. Estos derechos no pueden ser restringidos salvo las limitaciones previstas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, bajo los 	<p>parámetros establecidos por la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el Estado colombiano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Derecho al Retorno: Toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país, salvo cuando las restricciones se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los demás derechos, conforme a lo dispuesto por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el Estado Colombiano. 4. Derecho de Asilo: Es el derecho que tiene toda persona, en caso de persecución que no sea motivada por delitos comunes, de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales en la materia, suscritos por el Estado Colombiano. 5. Derecho a la participación con enfoque diferencial: Todas las políticas públicas migratorias deben ir encaminadas hacia una participación activa y completa de cada una de las personas; con especial énfasis en la atención y enfoque diferencial de las diferentes necesidades de la mujer. 6. Derecho a la gestión migratoria de derechos humanos: Los migrantes nacionales y extranjeros, tienen derecho a que toda la gestión, servicios o atención migratoria se de en el marco y la promoción de los derechos humanos. <p>Artículo 85°. Modifíquese el artículo 55 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>“ARTÍCULO 55. PERMISOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. Con fundamento en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores señalando los países exentos de visado, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar permisos de ingreso y permanencia a los visitantes extranjeros a los cuales no se les exija visa para su entrada al país hasta por noventa (90) días calendario.</p> <p>De este permiso sólo podrán ser eximidos los extranjeros que ingresen al país en modalidad técnica.</p> <p>A los extranjeros que ingresen para prestar asistencia técnica, se les otorgará un permiso por treinta (30) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; término durante el cual tendrán que realizar la actividad prevista. Si la actividad requiere tiempo adicional deberán realizar el trámite de visa de asistencia técnica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>“En virtud del principio de reciprocidad, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en su calidad de autoridad de control migratorio, podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días calendario, en atención a las actividades a realizar y al perfil migratorio que presente el ciudadano extranjero, sin perjuicio de lo establecido por acuerdos internacionales en materia de exención de visados suscritos por el Estado Colombiano”.</p>
<p>Artículo 86°. Modifíquese el artículo 56 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>“ARTÍCULO 56. PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA. Créase el permiso temporal de permanencia, que será expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el cual estará fundamentado en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores señalando los países exentos de visa y contemplando dos situaciones: i) para los extranjeros que ingresan al país como visitantes y ii) para los extranjeros que deben aclarar al interior del territorio colombiano alguna situación administrativa y judicial. La presencia en el territorio nacional de un extranjero siempre deberá contar previamente con la autorización de entrada y permanencia expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores u obedecerá a que su nacionalidad se encuentra incluida en el acto administrativo sobre exención de visas. En los casos señalados en la presente norma en los que no fuere así, procederá la expedición del Permiso Temporal de Permanencia, pero en ningún caso tal permiso podrá entenderse, asimilarse o equipararse a la expedición de una visa.</p> <p>En los casos anteriormente señalados se otorgará un plazo legal de permanencia en el país hasta por noventa (90) días calendario, el cual sólo podrá prorrogarse para la segunda condición del presente artículo de conformidad con las normas establecidas.</p> <p>En virtud del principio de reciprocidad la autoridad de control migratorio podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días calendario, sin perjuicio de lo establecido por acuerdos internacionales en materia de exención de visado suscritos por el Estado colombiano”.</p> <p>Artículo 87°. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) de connacionales fuera del país. Modifíquese el Artículo 22 del Decreto Ley 019 de 2012 así:</p> <p>“ARTÍCULO 22. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) de connacionales fuera del país. En todos los casos, la fe de vida (supervivencia) de los connacionales fuera del país, se probará ante las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral cada seis (6) meses mediante una de las siguientes opciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ante el Consulado de la circunscripción donde se encuentra el connacional. El Cónsul, con fundamento en los medios que a su criterio le permitan tener certeza del estado vital del solicitante, expedirá el correspondiente certificado de supervivencia y lo enviará a la respectiva entidad de seguridad social a través del canal que para tal fin se tenga establecido. 2. Mediante documento expedido por parte de la autoridad pública del lugar sede donde se encuentre el connacional en el que se evidencie la supervivencia. Esta constancia deberá ser apostillada o legalizada, según el caso, y remitida por el interesado a la dirección y dependencia que para tal fin determine la respectiva entidad de seguridad social. 	<p>Parágrafo. Los Consulados de Colombia en el exterior y los Fondos de Pensiones de Colombia, podrán realizar la validación no presencial de supervivencia y/o fe de vida de los pensionados residentes fuera del país, a través de la validación de información personal e historia pensional de la persona.</p> <p>Parágrafo Transitorio. El Ministerio del Trabajo establecerá un mecanismo no presencial de validación de supervivencia o acreditación de fe de vida para las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social Integral, implementado y desarrollado a través de los Consulados de Colombia en el Exterior y los Fondos de Pensiones, quienes certificarán la supervivencia del connacional fuera del país”.</p> <p>Artículo 88°. Fortalecimiento de la Diplomacia Científica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecerán y promoverán los intereses científicos nacionales a través de las misiones diplomáticas y la política exterior, permitiendo la generación de redes e infraestructura científica, el acceso a recursos de financiación, el fomento de nuevas industrias científicas en el territorio nacional, el intercambio de conocimiento científico entre Naciones y la gobernanza de la diplomacia científica; conforme al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación formalizará y ampliará los mecanismos de cooperación y coordinación para crear y fortalecer las redes, la diáspora científica y las colaboraciones con científicos y expertos colombianos en el exterior, con miras a incrementar la calidad de la investigación científica, así como su contribución e impacto al desarrollo de una economía basada en conocimiento.</p> <p>Artículo 89°. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 15 de la ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, el cual quedará así:</p> <p>“Parágrafo 3°. Los Ministerios y demás integrantes del Comité obligados constitucional o legalmente a rendir informes de gestión al Congreso de la República incluirán en estos un balance de las acciones realizadas en el campo de lucha contra la trata de personas, el cual deberá contener adicionalmente las propuestas o recomendaciones para la expedición de normas o ajustes a estas en materia de lucha contra este delito. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, su balance hará parte del informe anual que presenta el Consejo Superior de la Judicatura”.</p> <p>Artículo 90°: Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 15 de la ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, así:</p> <p>Parágrafo. El informe que rinde el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas será remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del inicio de cada periodo legislativo y será discutido en sesiones exclusivas que citen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes.</p> <p>Artículo 91°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. El Gobierno Nacional reglamentará las disposiciones contenidas en la presente Ley que lo requieran.</p> <p>Cordialmente los conciliadores,</p> <p>EMMA CLAUDIA CASTELLANOS Senadora de la República</p> <p>ANA PAOLA AGUDELO Senadora de la República</p> <p>JUAN DAVID VÉLEZ Representante a la Cámara</p> <p>ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO Representante a la Cámara</p>

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE, DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 463 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se aprueban el “Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 50 A)” y el “Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 56]”, firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016.

<p>Bogotá D.C., junio 08 de 2021</p> <p>Honorable Senador JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ Presidente Comisión Segunda Constitucional Permanente Senado de la República Ciudad</p> <p style="text-align: center;">REF: Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley No. 463 de 2021 Senado.</p> <p>En cumplimiento de la designación que la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la República me hiciera y de conformidad con los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5 de 1992, de la manera más atenta y dentro del término establecido para tal efecto, procedo a rendir Informe de PONENCIA POSITIVA para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente, del Proyecto de Ley No. 463 de 2021 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN EL «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 50 A)]» Y EL «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 56]», FIRMADOS EN MONTREAL, CANADÁ, EL 6 DE OCTUBRE DE 2016”, en los siguientes términos:</p> <p style="text-align: center;">• TRÁMITE LEGISLATIVO Y ANTECEDENTES</p> <p>El presente proyecto de ley fue radicado el día veintinueve (29) de abril de 2021 ante la Secretaría General del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. Claudia Blum y la Ministra de Transporte, Dra. Ángela María Orozco Gómez.</p> <p>La iniciativa fue publicada en la Gaceta No. 380 de 2021 del Congreso de la República, en la cual reposa el contenido del «Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 50 a)]» y el «Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 56]», firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016.</p>	<p>Por designación de la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fui designado para rendir informe de ponencia en primer debate mediante oficio CSE-CS-CV19-0144-2021 del tres (03) de junio de 2021.</p> <p style="text-align: center;">• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</p> <p>I. Generalidades sobre la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio sobre Aviación Civil Internacional</p> <p>Como lo expone la iniciativa radicada, la Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante, la “OACI”) es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1944 como órgano administrador del “Convenio sobre Aviación Civil Internacional” (en adelante, el “Convenio”), suscrito en Chicago, Estados Unidos de América, el 7 de diciembre de 1944. La OACI vela por la aplicación del Convenio y nace con el propósito de regular la aviación civil internacional.</p> <p>La República de Colombia aprobó la Convención, creadora de la OACI, mediante la Ley 12 de fecha 23 de octubre de 1947, siendo, desde entonces, Estado Miembro de la OACI.</p> <p>Desde la constitución de la OACI como máximo órgano rector de la aviación civil internacional, esta organización ha tenido que adecuarse a las necesidades de la comunidad aeronáutica internacional, a fin de hacer frente a los retos que la propia actividad plantea. Dichos retos son más complejos y difíciles de resolver, debido a la globalización y al acelerado desarrollo científico y tecnológico de finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI.</p> <p>Actualmente, la OACI cuenta con más de 190 Estados Miembros, junto a los cuales labora de forma constante para crear, mediante consenso, las normas, reglamentaciones y métodos recomendados para el funcionamiento, administración y supervisión de la aviación civil internacional, como también para definir las políticas que posibilitan al sector operar de forma segura, viable y eficiente, así como de manera que sea sostenible económicamente y responsable desde el punto de vista ambiental.</p>
<p>Por lo anterior, durante sus más de 74 años de labor, la OACI ha representado un foro en el cual convergen las voluntades de sus Estados Miembros bajo un espíritu de igualdad soberana. Los Estados Miembros de la OACI emplean sus normas, reglamentaciones, métodos y políticas para garantizar que sus propias normas de derecho interno y operativas nacionales de aviación civil, se ajusten a esos instrumentos internacionales, permitiendo la operación segura, confiable y coordinada de la red mundial de aviación, que consta de más de 100.000 vuelos diarios.</p> <p>Además de su función principal de establecer normas, métodos y políticas internacionales basadas en el consenso, la OACI: coordina la asistencia y la creación de capacidades entre sus Estados Miembros, en apoyo de los objetivos de desarrollo de la aviación; elabora planes globales de coordinación e implementación de los avances sobre seguridad operacional y navegación aérea, y produce informes sobre los indicadores del transporte aéreo, auditando la capacidad de los Estados en la supervisión y vigilancia de la seguridad operacional, así como en la protección de la aviación civil.</p> <p>La OACI está conformada por tres órganos permanentes: una Secretaría General, una Asamblea General y un Consejo.</p> <p>El Consejo es el órgano ejecutivo de la OACI, responsable ante la Asamblea General, cuyas principales funciones son:</p> <p>(a) Ejecutar las instrucciones de la Asamblea General y cumplir con los deberes y obligaciones que le asigna el Convenio.</p> <p>(b) Determinar su organización y reglamento interno.</p> <p>(c) Nombrar y definir las funciones de un Comité de Transporte Aéreo, que será electo entre los representantes de los miembros del Consejo y ante el cual será responsable el Comité.</p> <p>(d) Establecer una Comisión de Aeronavegación.</p> <p>(e) Adoptar y notificar a todos los Estados Miembros de la OACI las normas y métodos internacionales recomendados, los cuales constituyen los anexos del Convenio y son normas de carácter técnico.</p>	<p>(f) Examinar todo asunto relativo al Convenio que someta a su consideración un Estado Miembro de la OACI.</p> <p>II. Artículo 50A, 56 y 57 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional</p> <p>El artículo 50A del Convenio se refiere a la composición y elección del Consejo. Este artículo establece que el Consejo será un órgano permanente, responsable ante la Asamblea General. La elección de los Estados Miembros que componen el Consejo se realiza por conducto de la Asamblea General, cada tres años. Los Estados que forman el Consejo se dividen en tres grupos, a fin de cumplir con sus funciones y garantizar el logro de los objetivos de la OACI. Estos grupos están formados de la siguiente forma:</p> <p><i>Primer grupo:</i> de los Estados de mayor importancia en el transporte aéreo.</p> <p><i>Segundo grupo:</i> de los Estados no incluidos de otra manera, que contribuyen en mayor medida al suministro de instalaciones y servicios para la navegación aérea civil internacional.</p> <p><i>Tercer grupo:</i> de los Estados no incluidos de otra manera, cuya designación asegura la representación en el Consejo de todas las principales regiones geográficas del mundo.</p> <p>Por su parte, el artículo 56 del Convenio establece el nombramiento de la Comisión de Aeronavegación, que se compondrá de 19 miembros, nombrados por el Consejo entre las personas propuestas por los Estados Contratantes. Dichas personas deberán poseer las calificaciones y experiencia apropiadas en la ciencia y práctica aeronáuticas. El Consejo invita a todos los Estados Contratantes a que presenten candidaturas para la Comisión de Aeronavegación. Así mismo, el Presidente de la Comisión de Aeronavegación es nombrado por el Consejo.</p> <p>Por último, el artículo 57 del Convenio establece las funciones de la Comisión de Aeronavegación, entre las que se dispone:</p> <p>(a) Considerar y recomendar al Consejo, a efectos de adopción, modificaciones a los Anexos del Convenio.</p>

- (b) Establecer subcomisiones técnicas en las que podrá estar representado todo Estado Contratante, si así lo desea.
- (c) Asesorar al Consejo sobre la compilación y comunicación a los Estados Contratantes de toda información que considere necesaria y útil para el progreso de la navegación aérea.

III. Protocolos de enmienda a los artículos 50 A) y 56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional

El "Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 50 A)]", firmado en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, prevé un aumento del número de miembros del Consejo, de 36 a 40. Por su parte, el "Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 56]", firmado en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, establece un incremento del número de miembros de la Comisión de Aeronavegación, de 19 a 21.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 41 de la "Convención de Viena sobre el derecho de los tratados", suscrita el 23 de mayo de 1969, las modificaciones a los tratados serán posibles si el tratado lo permite o, si la modificación no está prohibida por el tratado y siempre que se reúnan dos requisitos: que la modificación no afecte el disfrute de los derechos ni el cumplimiento de las obligaciones de las demás Partes del tratado y que esta no se refiera a una disposición cuya inobservancia sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y el fin del tratado.

Deberá observarse que el Convenio admite enmiendas. En efecto, el literal j) de su artículo 49 establece, entre otras facultades y deberes de la Asamblea General, la de considerar las propuestas de modificación o enmienda de las disposiciones del Convenio y, en caso de aprobarlas, recomendarlas a los Estados Contratantes de acuerdo con las disposiciones del capítulo XXI del Convenio.

Las modificaciones o enmiendas al Convenio, según su artículo 94, deberán ser aprobadas por el voto de los dos tercios de la Asamblea General, y entrarán en vigor respecto de los Estados que las hayan ratificado, cuando las ratifiquen el número de Estados Contratantes fijado por la Asamblea General, número que, en todo caso, no será inferior a los dos tercios del total de los Estados Contratantes.

Por consiguiente, los dos Protocolos en referencia se están a lo dispuesto en la "Convención de Viena sobre el derecho de los tratados" y en el propio Convenio, dado que:

- (a) La Asamblea General de la OACI se reunió en su 39º período de sesiones y consideró oportuno proponer y aprobar el aumento del número de miembros del Consejo, de 36 a 40, y de la Comisión de Aeronavegación, de 19 a 21.
- (b) El Convenio no prohíbe estas clases de enmiendas.
- (c) Las modificaciones consignadas en los dos Protocolos no menoscaban el goce de los derechos ni el cumplimiento de las obligaciones de las Partes del Convenio.
- (d) Así mismo, las enmiendas no se oponen a la consecución efectiva de los fines del Convenio, como son, entre otros, desarrollar de manera segura y ordenada la aviación civil internacional en el mundo, evitar el despilfarró económico producido por una competencia excesiva y promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.

IV. Razones sobre la necesidad y conveniencia de que sean aprobados los Protocolos de enmienda a los artículos 50 A) y 56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional

De acuerdo con los autores de la Iniciativa, la principal razón que justifica la necesidad y conveniencia de aprobar los Protocolos de enmienda de la Convención surge del constante aumento del número de Estados Miembros de la OACI y de la expansión y aumento de la importancia del transporte aéreo internacional para las economías nacionales de muchos Estados.

En este sentido, y con relación al Consejo de la OACI (artículo 50 A de la Convención), un número más elevado de miembros en ese órgano aseguraría un mayor equilibrio, a través de un incremento en la representación de los Estados Contratantes del Consejo.

El mismo argumento se aplica a la Comisión de Aeronavegación (artículo 56 de la Convención), pues un mayor número de miembros otorga mayor equilibrio

mediante el aumento de la representación de los Estados contratantes de la Convención. Además, el ingreso de nuevos miembros permite a la Comisión aprovechar el conocimiento especializado y la experiencia sobre diversas especialidades y materias de un número cada vez mayor de integrantes.

También es válido resaltar que, mediante las Resoluciones A39-5 y A39-7, la Asamblea General de la OACI recomendó a todos sus Estados Miembros la ratificación de estos dos Protocolos a la mayor brevedad.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de la República de Colombia ha propuesto la ratificación de los referidos Protocolos, a fin de que el número de miembros del Consejo como de la Comisión refleje el incremento del número de Estados Miembros de la OACI.

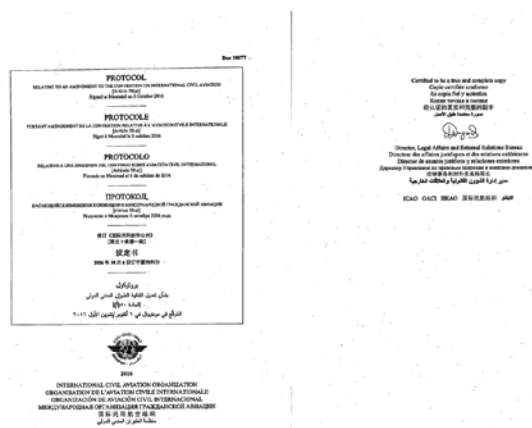
Deberá decirse que la actual enmienda del artículo 50 a) de la Convención constituye la quinta enmienda para incrementar el número de miembros del Consejo. El Convenio original preveía un Consejo compuesto por 21 Estados Miembros. Este número fue aumentado posteriormente en distintas oportunidades, cada una de las cuales ha reflejado las necesidades del transporte aéreo internacional en sus diferentes épocas. Así, en 1961 el número de integrantes del Consejo se incrementó a 27, en 1971 a 30, en 1974 a 33 y en 1990 a 36.

En similar sentido, la enmienda del artículo 56 de la Convención constituye su tercera modificación para el incremento de sus integrantes. El Convenio original preveía una Comisión compuesta por 12 miembros. Después, en 1971 los miembros se incrementaron a 15 y en 1989 a 19.

Ahora bien, la conveniencia de las enmiendas que se disponen en los dos Protocolos encuentran su sustento, entre otras normas, en el artículo 226 de la Constitución Política, en el cual se prevé que el Estado colombiano promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad y reciprocidad.

Así, al elevarse el número de los miembros del Consejo y de la Comisión de Aeronavegación de la OACI, se avanza una vez más en la internacionalización y democratización en el tratamiento de los problemas asociados a la actividad aeronáutica, lo cual asegura una mayor y más activa participación de los Estados Contratantes en la toma de decisiones sobre materias tan trascendentales.

V. «Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 50 a)]» y el «Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 56]», firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, de conformidad con el texto que reposa en la Gaceta 380 de 2021.



**TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA**

Proyecto de Ley No. 463 de 2021 Senado

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN EL «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 50 A)]» Y EL «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 56]», FIRMADOS EN MONTREAL, CANADÁ, EL 6 DE OCTUBRE DE 2016"

El Congreso de Colombia

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense el «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 50 A)]» y el «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 56]», firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 50 A)]» y el «PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL [ARTÍCULO 56]», firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, que por el artículo primero de esta Ley se aprueban, obligarán a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.



ERNESTO MACÍAS TOVAR
Senador de la República

**INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE EN SENADO DEL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 201 DE 2019 CÁMARA – 336
DE 2020 SENADO**

*por medio de la cual se establecen incentivos
tributarios para la formación y educación de la fuerza
pública, becas para la fuerza pública.*

Bogotá, D.C., junio de 2021

Honorable Senador
JOSÉ ALFREDO GNECCO ZULETA
Presidente Comisión Tercera
Senado de la República
La Ciudad

Ref.: INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN SENADO DEL PROYECTO DE LEY No. 201 DE 2019 – 336 DE 2020 SENADO. "por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública. becas para la fuerza pública"

Distinguido señor Presidente,

Reciba un cordial saludo. Atendiendo la designación que la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de Senado me hiciera como ponente, según acto del veinticuatro (24) de mayo de 2021 y notificado en la misma fecha; en virtud de las facultades constitucionales y las de la Ley 5ª de 1992, me permito poner a consideración de los Honorables Senadores de la Plenaria del Senado, el Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de Ley de la referencia, en los siguientes términos:

I. Antecedentes del proyecto

La iniciativa es de origen parlamentario, radicado en la Cámara de Representantes el pasado veintiséis (26) de agosto del 2019 por la Senadora Ruby Helena Chagüi Spath y el suscrito, además de los Representantes, Juan Manuel Daza Iguarán, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Juan Pablo Celis Vergel, José Gabriel Amar Sepúlveda, José Jaime Uscategui Pastrana, Christian Munir Garcés Aljure, Juan Fernando Espinal Ramírez, Wadith Alberto Manzur, Juan David Vélez Trujillo, Salim Villamil Quessep y Víctor Manuel Ortiz Joya, y; fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 804 de 2019.

La Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, designó como ponentes a los Honorables Representantes Víctor Manuel Ortiz, Christian Munir Garcés, Armando Antonio Zabarain y Nubia López Morales, quienes el pasado veinticinco (5) de noviembre del 2019 radicaron ponencia favorable, la cual se encuentra publicada en la Gaceta No. 1136 de 2019, junto con un pliego de modificaciones en el sentido de priorizar las becas a los miembros de la fuerza pública pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 como población beneficiaria de las becas y sobre cuyas donaciones recaerá los beneficios tributarios planteados.

Durante el trámite y discusión de la ponencia de primer debate del proyecto de ley se dejaron como constancia dos (2) proposiciones a la iniciativa, la cual se adelantó en sesión formal virtual de la Comisión Tercera de Cámara del ocho (8) de mayo de 2020, siendo aprobado en Primer Debate de Cámara por unanimidad, previo anuncio en sesión formal virtual del seis (6) de mayo de 2019.

dirigidas a los miembros de las fuerzas públicas, como hecho generador para el deducción y descuento en la renta.

El cuarto artículo crea un Patrimonio Autónomo como receptor de las donaciones, a cargo del Ministerio de Defensa.

En el quinto se establece la finalidad de las donaciones para las becas para la Fuerza Pública.

El sexto, obliga al Gobierno Nacional a reglamentar esta Ley dentro de los siguientes seis (6) meses.

El artículo séptimo y último, es el de la vigencia y derogatoria.

III. Objeto del Proyecto:

El proyecto busca establecer una deducción tributaria para las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a la Fuerza Pública, a través del Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional con destinación a financiar un programa de becas para los aspirantes a miembros de la Fuerza Pública y aquellos estudiantes que una vez ya vinculados a los programas de estudio, cumplan con las exigencias académicas y apliquen al programa de becas.

Así mismo, incentivar que la población civil se presente y se incorporen en carrera para la Fuerza Pública, con ello se posibilitaría el aumento del pie de fuerza y las condiciones de seguridad y convivencia.

IV. Justificación

Refieren los autores de la iniciativa, quienes después de exponer un diagnóstico muy acertado sobre la situación de la disminución de los miembros de la Fuerza Pública, destacan con especial relevancia la importancia de la formación académica del pie de fuerza para "fortalecer el capital humano, la organización y participación de la población civil, a través de la incorporación de nuevos miembros en cada una de las instituciones y en sus distintos niveles; y así, solucionar los problemas de violencia y delincuencia a nivel local y nacional."

En este sentido, elaboran un estudio sobre la oferta académica y los valores de matrícula de los programas educativos que, de manera autónoma, ofrecen las diferentes academias de las Fuerzas a sus miembros.

Concluyendo así, que los programas son reducidos y sus costos de matrícula son altos, habida cuenta de la especialidad de la formación que se requiere en cada campo.

V. Conceptos sobre la iniciativa.

Durante el trámite en la Cámara de Representantes, dentro del estudio de la

Una vez designados como ponentes para segundo debate Honorables Representantes Víctor Manuel Ortiz, Christian Munir Garcés, Armando Antonio Zabarain, Nubia López Morales y con la adición de Katherine Miranda Peña, el día diecinueve (19) de junio de 2020 se radicó informe de ponencia para segundo debate favorable acogiendo el texto aprobado en el primer debate. Así las cosas, en sesión no presencial de la Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha veintinueve (21) de octubre de 2020, fue aprobada la iniciativa con modificaciones, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día diecinueve (19) de octubre de 2020, como consta en las Actas No. 178 y 179 de dicha corporación.

Durante el segundo debate en la Cámara de Representantes se radicaron siete (7) proposiciones, de las cuales se acogieron dos (2) y las restantes fueron dejadas como constancias.

La Mesa Directiva de la Comisión Tercera de Senado me designó como ponente para primer debate en el Senado de la República, según oficio fechado el seis (6) de noviembre de 2020 y notificado en la misma fecha; respecto de la cual se radicó ponencia positiva con pliego de modificaciones posterior a haber escuchado a las entidades interesadas y revisadas las modificaciones durante el trámite en la Cámara, el articulado se ajusta en redacción y se reduce a cinco (5) artículos, incluida la vigencia. Se mejora la redacción de los artículos 2 y 3 ajustándolos a una mejor técnica legislativa para efectos de mantener la estructura vigente del artículo 158-1 y 256 del E.T. Se acogen las modificaciones presentadas por el Gobierno Nacional, para que los recursos sean administrados por el ICETEX. Se crea un nuevo artículo, el cual recoge diferentes textos aprobados durante el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, en el cual se establecen los parámetros de las becas a ser beneficiadas, los criterios de priorización y asignación de la beca. Se amplía el término de reglamentación a dos años, indicando los Ministerios responsables de la reglamentación de la presente ley. Además, se pone en cabeza del Ministerio de Defensa la obligación de rendir un informe sobre el manejo de los recursos. La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta No. 450 de 2021.

Así las cosas, en sesión ordinaria no presencial de fecha diecinueve (19) de mayo de 2021 con Acta No. 34, se anunció para surtir el primer debate. Como consta en el Acta No. 35 de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2021, en sesión ordinaria no presencial, se discutió y aprobó el proyecto sin ninguna modificación conforme al texto propuesto con el voto negativo del Senador Gustavo Bolívar Moreno.

II. Articulado

El texto original del proyecto de ley está compuesto por siete (7) artículos incluida la vigencia.

El primero se refiere al objeto de la Ley.

El segundo y el tercero modifican los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, respectivamente, en el sentido de adicionar las donaciones para becas educativas

iniciativa, en virtud de la importancia y trascendencia de la materia de la iniciativa, diferentes ministerios han radicado concepto, dentro del cual se analizan las bondades del articulado y hacen algunas recomendaciones, como sigue:

a. Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

"(...) No obstante, el beneficio tributario que se pretende incluir en el Proyecto de Ley intenta equiparar el tratamiento fiscal que reciben los programas académicos de los miembros de la fuerza pública con aquellos recibidos por las donaciones realizadas a las instituciones de educación superior. Las disposiciones tributarias actualmente vigentes impiden la procedencia del beneficio si no se trata de donaciones que se realicen por intermedio de las Instituciones de Educación Superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) dirigidas a programas de becas o créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de Educación Nacional." En estos términos, las instituciones que ofrecen programas académicos especializados para los miembros de la fuerza pública no se encuentran cubiertos por esta normatividad.

(...)[Frente al Patrimonio Autónomo] es importante advertir que, de permanecer dic a disposición en el articulado, se sugiere precisar que estas donaciones deberán ser incorporadas en el Presupuesto General de Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Estatuto Orgánico de Presupuesto1 y los artículos 62 y 345 de la Constitución Política.

A pesar de que esta Cartera ha sido reticente a conceder aval frente a iniciativas que crean beneficios fiscales especialmente considerando la labor actual de la Comisión de Estudio de beneficios tributarios creada por el artículo 13 de la Ley 2010 de 2020, este Ministerio solicita acoger la recomendación efectuada frente al artículo 4 y emite concepto favorable a la iniciativa legislativa del asunto."

b. Ministerio de Defensa Nacional

"(...) Se considera que el objetivo de la iniciativa se podría desarrollar de una manera más sencilla, mediante la recepción directa de las donaciones por parte del ICETEX, quien administraría los recursos, los cuales estarían destinados al pago de las becas y auxilios a los que hace referencia el proyecto de ley y cuyos rendimientos financieros sean reinvertidos en los mismos, sin el cobro de gastos de administración, evitando de esta manera, la creación y gestión operativa de un patrimonio autónomo a cargo de este Ministerio. (...)"

c. Ministerio de Educación Nacional

"(...) recomienda tener en cuenta que es el ICETEX la entidad encargada de administrar los recursos destinados a otorgar becas en Colombia y, que para la asignación de becas se sigue el procedimiento consagrado en los Decretos 978 de 2018 y 1584 de 2019."

d. Ministerio de Ciencia y Tecnología

" (...) los programas de becas para estratos 1,2 y 3 susceptibles de acceder a beneficio tributario, son aprobados por el Ministerio de Educación Nacional con base en la reglamentación expedida en los decretos 978 de 2018 y 1584 de 2019. En dicha reglamentación y según lo definido en el parágrafo primero del artículo 158-1 del estatuto Tributario, es función del CNBT asignar anualmente un monto total de donaciones que las instituciones de educación y el ICETEX pueden recibir y realizar las respectivas reservas de cupo para soportar el beneficio tributario.

Con dicha finalidad, el CNBT cuenta con cupos para inversión y donación controlando de manera efectiva, el monto de inversiones o donaciones que pueden acceder a estos incentivos tributarios. Sin embargo, en el proyecto de ley no es claro si los recursos recibidos por donaciones para formación y educación de la fuerza pública se encontrarán inmersos en el cupo de donaciones para educación asignado a los programas de becas aprobados por el Ministerio de Educación, dado que tiene la misma naturaleza, y al igual que ocurre con los diferentes incentivos por inversión, el CNBT define anualmente un cupo único para todas las modalidades existentes por inversión.

De igual manera, existen inquietudes relacionadas con la justificación de la creación de un patrimonio autónomo para la administración de dichas donaciones, dado que, para ello, el ICETEX está habilitado para recibir las donaciones y destinarlas a los diferentes programas de becas y/o créditos condonables. Ahora bien, en caso de no poder operar el programa por medio de dicha institución, surgiría la necesidad de establecer un reglamento para el proceso de reserva de cupo que debería realizar el CNBT con anterioridad a la recepción de donaciones por parte del Patrimonio Autónomo. (...)"

e. ICETEX

" (...) [L]a lectura del numeral vi) de los artículos 2 y 3 del proyecto de ley, permite interpretar y así debe garantizarse en este caso, conforme al marco legal que lo gobierna, que al ICETEX como administrador de los recursos que para el efecto dispongan los donantes de los fondos que se conformen, se le reconocerán los costos asociados a la gestión de administración. (...)

no puede desconocerse que la nueva naturaleza jurídica de la entidad, que mutó de establecimiento público hacia la de una entidad financiera, le exige observar unos criterios de auto sostenibilidad en su gestión que hagan viable su funcionamiento, dentro de los que se encuentran los costos que genere la operación realizada por ICETEX, sin discriminar si se trata de administración de recursos públicos o privados, pues ambos tienen la misma destinación y finalidad que es fomentar la educación superior en el país. (...)

En síntesis, esta entidad recomienda honrar el principio presupuestal de programación integral de que trata el artículo 17 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, y garantizar al ICETEX los costos de operación y administración del fondo. (...)

(...) incorporar al proyecto de ley un direccionamiento del otorgamiento de becas en sintonía con la forma que las focaliza el Gobierno Nacional en sus programas, esto es, tomando como insumo la información de la encuesta SISBÉN como

instrumento único de focalización de cara a otorgar las becas que pregona el proyecto de ley."

VI. Consideraciones del Ponente

La iniciativa, puesta a consideración a la Comisión Tercera, como ya se manifestó anteriormente busca establecer beneficios tributarios para las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a programas de becas que financien la formación de quienes ingresen a la Fuerza Pública y aquellos alumnos que una vez ya vinculados a los programas, cumplan con las exigencias académicas y apliquen al programa de becas.

La seguridad es un valor democrático fundamental para la edificación de una sociedad justa. Es una garantía ante la amenaza constante que vive nuestro país frente al narcotráfico, la minería criminal y otras graves expresiones de la delincuencia en el país. Los excelentes resultados que han logrado tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional frente a la protección de nuestros campos y ciudades, la ley y la democracia, refuerzan la idea de que este es el camino correcto para recuperar la seguridad que se había perdido en nuestro país.

Nuestra libertad y democracia se sostienen sobre la Fuerza Pública y como un agradecimiento y profundo respeto por todos sus miembros consideramos fundamental brindar las herramientas necesarias para mejorar y fortalecer la educación de todos aquellos que deseen formar parte de nuestra Fuerza Pública. Sin duda sabemos que todos los aportes que de allí provengan permitirá que estos hombres y mujeres continúen defendiendo el estado de derecho en nuestro país.

Me adhiero a las consideraciones de los ponentes para segundo debate de la Cámara de Representantes, cuando explicaban las bondades del Proyecto:

"En primer lugar, en los ámbitos rural y urbano existe una escasez de pie de fuerza para hacer frente a las diferentes amenazas que enfrentamos en todos los niveles. En el caso de las Fuerzas Militares para el año 2017 contaban con 237.876 uniformados efectivos, que si se compara con el año 2008 representa una disminución del 13%, es decir, 36.418.

Ahora bien, en el caso de la Policía cuenta con alrededor de 180.000 integrantes; no obstante, este pie de fuerza es insuficiente para enfrentar los retos de seguridad ciudadana en las ciudades capitales. Por ejemplo, de acuerdo con la oficina para drogas y el delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda tener 300 uniformados por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Bogotá no cumple con dicha tasa, sino que posee 234 policías cada cien mil habitantes, lo cual a nivel de la capital significa la necesidad 10.500 policías más para poder tener un pie de fuerza adecuado; y en el caso de Cali, la falta es de al redor de 1500 policías.

Así mismo, todos los días se retiran policías por diferentes razones, pero no existe una misma tasa de formación. Un ejemplo de esta situación es la

declaración de nulidad del Decreto 1858 de 2012 por parte de la Corte Constitucional; este decreto aumentaba el tiempo para obtener la asignación de retiro de 20 a 25 años del nivel ejecutivo. Con esta decisión, la nación y la Policía enfrentarán una serie de retiros que repercutirá en la seguridad. De allí que, este proyecto pueda contribuir a superar el déficit del pie de fuerza que necesita la nación para enfrentar los retos de seguridad. Recordamos que la presencia del Estado colombiano debe ser integral y que la presencia de la Fuerza Pública representa la legitimidad de la misma frente a la ciudadanía.

En segundo lugar, como observamos, los costos para inscribirse y la carrera en cualquiera de las cuatro Fuerzas y en sus diferentes niveles son elevados; ello en muchas ocasiones representa un obstáculo para poder aspirar o continuar el proceso, un proceso que dentro de la carrera tiene más costos de los cuales se esgrimieron. En otras palabras, el alto valor económico influye negativamente en muchos casos para la deserción del proceso, incluso cuando ya se encuentran realizando el curso.

Debemos recordar la situación socioeconómica de miles de familias en nuestro país: Por un lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE (2017), de cada 10 hogares consultados 3,2 no tuvieron el dinero suficiente para cubrir sus necesidades en el año 2016. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares del año 2018 reveló que los hogares tienen un gasto promedio de \$1.800.000 pesos. Así mismo, Colombia tiene una pobreza monetaria del 27% que representa 13 millones de personas. En otras palabras, muchos jóvenes pueden tener la voluntad y altas capacidades; empero, sus condiciones socioeconómicas impiden, en muchos casos, hacer parte de nuestra Fuerza Pública.

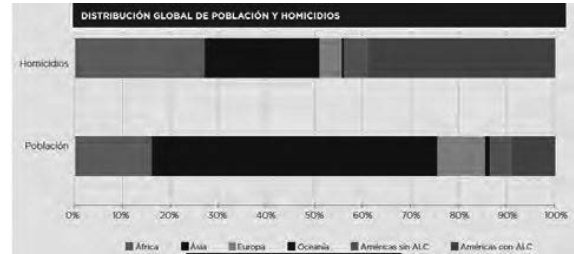
En este sentido, este proyecto de ley tiene la virtud de poder considerar a las personas de estratos 1, 2 y 3, a saber, afectar positivamente para poder contribuir a un proyecto de vida como lo es ser integrante de la Fuerza Pública. Las becas totales o parciales pueden significar ingresar y mantenerse en las instituciones, dado que los costos para las familias que asumen estos retos son un obstáculo considerable e incluso insuperable. Por esta razón, consideramos que puede contribuir en la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, dado que retribuye un desempeño académico y unas condiciones económicas. En tercer lugar, contribuye en su carácter a la profesionalización de la Fuerza Pública, en el sentido de aportar a la formación integral y la capacitación de los jóvenes. En tercer lugar, debemos considerar que la formación está relacionada con las circunstancias de ingreso y la constante necesidad de capacitación del personal. En otras palabras, debemos observar una integralidad para poder seguir afianzando la profesionalización de los integrantes de la Fuerza Pública. Solo mediante este desarrollo podemos seguir observando un crecimiento en humanismo, capacidades personales e integrales. El gasto en las Fuerzas Públicas no debe ser observado como un gasto más; por el contrario, es un servicio prioritario que contribuye a la seguridad y el orden público.

En este horizonte, podemos comprender que la inversión en los miembros de la fuerza pública tiene armonía y coherencia con el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia donde se define un conjunto de fines esenciales del Estado colombiano: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional; mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." (Constitución Política, 1991). Por esto, el Estado tiene la obligación de satisfacer adecuadamente un conjunto de necesidades de los ciudadanos, garantizando la convivencia y la paz social, y esto lo puede lograr, entre otros medios, con una Fuerza Pública profesional y de alta excelencia. La Fuerza Pública debe considerar que los gastos de formación deben ser para todos los miembros, a saber, lo necesario es una capacitación integral para cada uno.

En cuarto lugar, debemos considerar los nuevos retos en seguridad que implican una dinámica de la globalización, mutación de las dinámicas criminales, entre otros. Lo que se ha considerado como Seguridad Ciudadana¹³. Debemos observar que el flagelo de la inseguridad no es aislado y único que se presenta en nuestro país; por el contrario, se presenta como una epidemia en el continente, y al mismo tiempo, este es un desafío que los Estados muestran déficit en materia de justicia y seguridad. De igual manera, el azote de la inseguridad revela que los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten cooperación y convivencia positiva.

Así mismo, debido al alto grado de inseguridad se presenta el fenómeno de "justicia a mano propia", como consecuencia de la falta de eficiencia y eficacia de la justicia¹⁵. Este fenómeno revela la necesidad de justicia y seguridad que necesita la comunidad para su bienestar y calidad de vida. Es relevante resaltar que Colombia en el Índice Global de Impunidad¹⁶ se posiciona en el octavo lugar entre los de mayor impunidad a nivel mundial, lo cual genera en la ciudadanía un sentimiento de desconfianza frente a las instituciones, es decir, deslegitima al propio Estado en su conjunto.

Un problema histórico en Latinoamérica es la baja capacidad estatal para ejercer control territorial, conllevando problemas fundamentales de violencia e inseguridad que imposibilitan el ejercicio real del Estado de Derecho. Según el BID (Alvarado, 2018) para el año 2018 Latinoamérica fue la región más violenta del mundo con un 39% de homicidios, a pesar de tener solamente el 9% de la población mundial y no tener conflictos entre Estados:



Podemos complementar el análisis con la idea de repensar el concepto de seguridad como un "enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces." (PNUD, 2013, pág. 7) El replanteamiento de la seguridad integral puede conllevar un cambio efectivo en la vida de los ciudadanos generando una legitimidad al Estado y el sistema democrático.

Por este panorama internacional y nacional, Colombia necesita fortalecer el capital humano de la Fuerza Pública, lo cual puede significar en establecer un contacto directo con los ciudadanos y la lucha contra la impunidad que lleve a la mejora de la realidad. Al mismo tiempo, este fortalecimiento de los miembros de la fuerza pública tiene que asumir los de las transformaciones criminales: las amenazas son de carácter nacional y transnacional como lo ejemplifica los carteles de droga. Es importante resaltar que la inseguridad y la violencia no solamente afecta el ejercicio del Estado de derecho y la democracia, posee también consecuencias negativas en el terreno socioeconómico.

Por estas consideraciones, los analistas señalan que los avances en materia de seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada "sino de un enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces". De igual manera, con esta nueva perspectiva, debemos colocar al ciudadano en el centro de la discusión y que él asuma un rol primordial en la construcción de un ambiente seguro para la comunidad. Esto significa que la Fuerza Pública tenga la formación para poder asumir los nuevos retos y dinámica más activa frente a la ciudadanía. Este sería un beneficio de este proyecto de ley, en tanto que plantea un impacto en las relaciones frente a la seguridad y los ciudadanos.

Tal y como lo explicaría el politólogo chileno Norbert Lechner, la Conflictiva y nunca acabada construcción del orden social es una realidad a la cual se han enfrentado todas las sociedades humanas a lo largo de la historia; este es un proceso sin fin, que se ve reflejado en un ordenamiento jurídico, cultural, social y político. De allí que todas las sociedades humanas se han enfrentado al reto de construir e implementar modelos políticos, institucionales, sociales, gubernamentales e institucionales que sean óptimos y eficientes, una preocupación que se ha profundizado en las sociedades modernas. Siendo la formación de la Fuerza Pública un elemento fundamental de la construcción del orden social deseado."

Aunado a lo anterior, los comentarios constructivos de las entidades interesadas del Gobierno Nacional en el asunto que trata la iniciativa y el buen recibo por parte de los autores, considero necesario ajustar la redacción del articulado. Con ello, se hace mayor claridad en el objeto de la norma, materializamos el principio de eficiencia administrativa y, se dictan los lineamientos generales para que el Gobierno Nacional reglamente el Programa de Becas de estudio para los miembros de la Fuerza Pública financiado por las donaciones que realicen las personas naturales y jurídicas privadas en favor de la seguridad del país.

VII. Pliego de modificaciones

TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE SENADO	TEXTO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p>	<p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p>	Se ajusta numeración..
<p>Artículo 3. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN</p>	<p>Artículo 3. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN</p>	Se ajusta numeración

TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE SENADO	TEXTO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<p>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p>	<p>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p>	

VIII. Impacto Fiscal

El presente proyecto de ley, al no ordenar gasto, no comprende un impacto fiscal y en consecuencia no requiere cumplir con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, ni se encuentra condicionado al aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

IX. Conflicto de Intereses

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones, que modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, que establece la obligación al autor del proyecto presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, siendo estos, criterios guías para que los congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento.

Frente al presente proyecto, se considera que no genera conflictos de interés, puesto que los posibles beneficios particulares, actuales y directos, conforme a lo dispuesto en la ley, dado que el objeto de la iniciativa versa sobre deducciones o descuentos en el impuesto de renta, que aplica para todas las personas naturales y jurídicas que hagan donaciones para becas dirigidas a los miembros de la fuerza pública, no se configura causal para predicar un impedimento.

Por otro lado, al encontrar que los beneficiarios de las becas educativas son miembros de la fuerza pública perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 y oriundos de municipios con mayores índices de pobreza, mayor afectación por el conflicto armado, menor presencia institucional y mayor afectación por economías ilegales, si algún familiar del Congresista, dentro de los grados enunciados por la ley, hace parte de dicha población, el Congresista deberá presentar un conflicto de interés, frente

<p>del cual se deduce su improcedencia por considerar que esta ley cobijará a toda la población por igual y sus efectos regirán para el futuro.</p> <p>Finalmente, se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley no exime del deber del Congresista de identificar causales adicionales.</p> <p style="text-align: center;">PROPOSICIÓN</p> <p>De acuerdo con las consideraciones expuestas, solicitamos a los Honorables Senadores de la Plenaria del Senado de la República, aprobar en segundo debate el PROYECTO DE LEY No. 201 DE 2019 – 336 DE 2020 SENADO. <i>“por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública. becas para la fuerza pública”</i>, conforme al pliego de modificaciones anexo.</p> <p>De los Honorables Senadores,</p> <p>FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ Senador de la República Ponente</p>	<p style="text-align: center;">TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN SENADO DEL PROYECTO DE LEY No. 201 DE 2019 CÁMARA - 326 DE 2020 SENADO.</p> <p style="text-align: center;"><i>“por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública. becas para la fuerza pública.”</i></p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer beneficios tributarios para las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a programas de becas que financien la formación de quienes ingresen a la Fuerza Pública y aquellos alumnos que una vez ya vinculados a los programas, cumplan con las exigencias académicas y apliquen al programa de becas.</p> <p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;">“Artículo 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p> <p>ARTÍCULO 3. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;">“ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. (...)</p> <p>iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.</p> <p>ARTÍCULO 4. BECAS PARA LA FUERZA PÚBLICA. Las becas de estudio de las que trata esta ley podrán ser total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir matrícula, dotación, manutención, útiles, libros y transporte, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto de las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas y créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 1. Los becarios serán ciudadanos colombianos que por primera vez ingresen a la formación en la Fuerza Pública y aquellos estudiantes de las distintas academias que cumplan con los requisitos exigidos en la reglamentación.</p>
<p>PARÁGRAFO 2. Se priorizará la asignación de becas de las que trata el presente artículo a aspirantes que provengan de los municipios con mayores índices de pobreza, mayor afectación por el conflicto armado, menor presencia institucional y mayor afectación por economías ilegales.</p> <p>PARÁGRAFO 3. Dentro de los criterios para la asignación de las becas, deberá tenerse en consideración el desempeño académico y las condiciones socioeconómicas del aspirante, entre otros.</p> <p>PARÁGRAFO 4. En virtud del principio de transparencia administrativa, anualmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá rendir un informe al Congreso de la República de los recursos recibidos, su destinación y la forma de asignación.</p> <p>PARÁGRAFO 5. El Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Defensa Nacional y Ministerio de Educación, dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la presente Ley reglamentará la materia.</p> <p>ARTÍCULO 5. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación.</p> <p>De los Honorables congresistas,</p> <p>FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ Senador de la República Ponente</p>	<p style="text-align: center;">TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN DEL DIA 24 DE MAYO DE 2021 PROYECTO DE LEY N°. 336/2020 SENADO - 201/2019 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. BECAS PARA LA FUERZA PÚBLICA.”</p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer beneficios tributarios para las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a programas de becas que financien la formación de quienes ingresen a la Fuerza Pública y aquellos alumnos que una vez ya vinculados a los programas, cumplan con las exigencias académicas y apliquen al programa de becas.</p> <p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;">“Artículo 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. (...)</p> <p>vii.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa.”</p> <p>ARTÍCULO 3. Adiciónese un numeral iv.) al artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;">“ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. (...)</p> <p>vii.) a las donaciones recibidas por intermedio del ICETEX, dirigidas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen</p>

<p>a la Fuerza Pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrativos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos en el mismo programa."</p> <p>ARTÍCULO 4. BECAS PARA LA FUERZA PÚBLICA. Las becas de estudio de las que trata esta ley podrán ser total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir matrícula, dotación, manutención, útiles, libros y transporte, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto de las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas y créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 1. Los becarios serán ciudadanos colombianos que por primera vez ingresen a la formación en la Fuerza Pública y aquellos estudiantes de las distintas academias que cumplan con los requisitos exigidos en la reglamentación.</p> <p>PARÁGRAFO 2. Se priorizará la asignación de becas de las que trata el presente artículo a aspirantes que provengan de los municipios con mayores índices de pobreza, mayor afectación por el conflicto armado, menor presencia institucional y mayor afectación por economías ilegales.</p> <p>PARÁGRAFO 3. Dentro de los criterios para la asignación de las becas, deberá tenerse en consideración el desempeño académico y las condiciones socioeconómicas del aspirante, entre otros.</p> <p>PARÁGRAFO 4. En virtud del principio de transparencia administrativa, anualmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá rendir un informe al Congreso de la República de los recursos recibidos, su destinación y la forma de asignación.</p> <p>PARÁGRAFO 5. El Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Defensa Nacional y Ministerio de Educación, dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la presente Ley reglamentará la materia.</p> <p>ARTÍCULO 5. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación.</p> <p>Bogotá. D.C. 24 de mayo de 2021</p> <p>En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para primer debate del Proyecto de Ley N°. 336/2020 SENADO-201/2019</p>	<p>CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. BECAS PARA LA FUERZA PÚBLICA. Una vez aprobada la proposición la Presidencia sometió a consideración el articulado presentado por el ponente, <u>siendo aprobado sin modificaciones</u>. La Comisión de esta forma declara aprobado en su primer debate el proyecto mencionado. Acta No. 35 de 24 de mayo de 2021. Anunciado el día 19 de mayo de 2021, Acta 34 con la misma fecha.</p> <p style="text-align: center;">Dr. JOSÉ ALFREDO GNECCO ZULETA Presidente</p> <p style="text-align: center;">Dr. FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIÉ Ponente</p> <p style="text-align: center;">RAFAEL OYOLO OPRDOSGOITIA Secretario General</p>
--	--

CONTENIDO

Gaceta número 594 - martes, 8 de junio de 2021

SENADO DE LA REPÚBLICA

Págs.

INFORMES DE CONCILIACIÓN

Informe de conciliación y texto conciliado al proyecto de ley número 36 de 2019 Senado, 459 de 2020 Cámara, acumulado con el proyecto de ley número 001 de 2019 Senado, por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), y se dictan otras disposiciones.....	1
--	---

PONENCIAS

Informe de ponencia para primer debate y texto propuesto en la Comisión Segunda Constitucional Permanente, del Proyecto de Ley Número 463 de 2021 Senado, por medio de la cual se aprueban el “Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 50 A)]” y el “Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional [artículo 56]”, firmados en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016	14
Informe de ponencia para segundo debate, texto propuesto y texto definitivo en Senado del proyecto de ley número 201 de 2019 Cámara – 336 de 2020 Senado, por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública, becas para la fuerza pública	17